

HISTORIA MINIMA DE



la Guerra Civil española

Enrique Moradiellos



EL COLEGIO DE MÉXICO



TURNER

III EL ESTALLIDO DE LA GUERRA: UN GOLPE MILITAR PARCIALMENTE FALLIDO

La sublevación militar iniciada en Marruecos el 17 de julio de 1936 se extendió por casi todas las guarniciones peninsulares, insulares y coloniales de España. Cuatro días después la rebelión había logrado implantar su dominio indiscutido sobre todas las colonias, una amplia zona del oeste y centro peninsular, un reducido núcleo andaluz y en los archipiélagos de Canarias y Baleares (salvo la isla de Menorca). Sin embargo, la rebelión había sido aplastada por un pequeño sector leal del ejército con ayuda de milicias obreras armadas urgentemente en dos grandes áreas aisladas entre sí: la zona centro-oriental peninsular (incluyendo Madrid, Barcelona y Valencia) y una estrecha franja norteña (desde el País Vasco hasta Asturias, salvo Oviedo). Ese inesperado fracaso de la sublevación en la mitad del país forzó la conversión del golpe en una verdadera guerra civil de duración en principio incierta y de violencia creciente.

LA TORMENTA DE JULIO DE 1936: ÉXITOS Y FRACASOS

El plan de operaciones de los conjurados había sido elaborado por Mola, desde su favorable destino en Pamplona (donde el apoyo popular carlista estaba muy arraigado), a partir de su "Primera instrucción reservada".

Fecha el 25 de abril de 1936, esa directiva fue distribuida a todos los mandos militares involucrados en la conspiración, entre ellos, varios generales de prestigio en las filas: Franco, recién destinado en la comandancia de Canarias y previsto jefe del ejército de África en el protectorado de Marruecos; Cabanellas, al mando de la división de Zaragoza; Goded, que ocupaba la comandancia de Baleares; y Queipo de Llano, que ejercía como inspector general de Carabineros.

Sobre la base de aquella instrucción había ido perfilándose una insurrección militar escalonada a partir de las tropas de Marruecos, que serían secundadas por las restantes guarniciones, con la posibilidad de tener que tomar al asalto algunas plazas consideradas difíciles (sobre todo Madrid y Barcelona, donde la conjura apenas conseguía adeptos). Dos axiomas estaban claros: la operación iba ser un acto de guerra en toda su violencia brutal y tenía como objetivo instalar en el poder un gobierno militar cuyo modelo era el bien conocido del Directorio de Primo de Rivera de 1923, esta vez presidido por Sanjurjo una vez regresara del exilio en Lisboa. El texto de aquella primera instrucción no dejaba dudas sobre ambas premisas y sería la guía de actuación de los sublevados:

Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándose castigos ejem-

plares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelga. Conquistado el poder, se instaurará una dictadura militar, que tendrá por misión inmediata restablecer el orden público, imponer el imperio de la ley y reforzar convenientemente al Ejército para consolidar la situación de hecho que pasará a ser de derecho.

Si bien el asesinato de Calvo Sotelo el 13 de julio fue presentado como la chispa que prendió la llama, en realidad la fecha de comienzo de la operación había sido fijada por Mola previamente. Sería "el 17 (de julio) a las 17 (horas)" en Melilla, una de las capitales del protectorado, puesto que allí la trama conspirativa contaba con mandos respetados (como el teniente coronel Juan Yáguë, de la Legión) y con apoyos abrumadores entre los oficiales. Además, dada la prevista necesidad de realizar operaciones móviles contra Madrid y otras ciudades, el levantamiento solo podía iniciarse por aquel sector del ejército más disciplinado y curtido en la lucha: un total de más de 32.000 hombres, contando con 4.200 legionarios, 17.000 regulares indígenas (los "moros") y 11.000 reclutas del servicio militar obligatorio.

El levantamiento iniciado en Melilla el día y hora previstos triunfó de inmediato, tras destituir, encarcelar y, en varios casos, fusilar a los jefes y oficiales que trataron de resistir. Mola había advertido en su "quinta instrucción" del 20 de junio: "aquel que no esté con nosotros está contra nosotros y como enemigo será tratado". Y la máxima se aplicaría de inmediato contra los mandos leales a la República, con la ejecución del general Romera-

les, comandante militar de Melilla, del capitán Álvarez Buylla, alto comisario, del capitán Leret, jefe de la base de hidroaviones mellillense, y del comandante Ricardo Lapuente Bahamonde (primo hermano de Franco), jefe del aeródromo de Tetuán, entre otros.

La sublevación de julio de 1936 comenzaba, así pues, como una guerra civil en el seno del ejército y sus primeras víctimas serían los mandos militares opuestos a la intentona o que fracasaron en la tentativa insurreccional. Por lo que respecta al primer caso, de hecho, fueron fusilados durante la guerra en toda España catorce generales (otros dos con posterioridad al término del conflicto), al igual que tres almirantes de la Armada. Por lo que hace al segundo caso, sufrieron idéntica pena unos 1.500 generales y oficiales acusados de traidores o desafectos (como les pasaría a Goded y Fanjul, por ejemplo y de manera destacada).

El triunfo de los insurrectos en el protectorado fue la señal para que Franco se sublevara en Canarias en la madrugada del 18 de julio de 1936. Lo hizo publicando un manifiesto explicativo que era un compendio de doctrina nacional-militarista, con su apelación al sagrado deber del ejército para asumir la autoridad pública por el bien de la patria y para salvarla de mortales enemigos internos y externos. Por eso fue masivamente difundido por los medios de propaganda en poder de los alzados:

¡Españoles! A cuantos sentís el santo amor a España, a los que en las filas del Ejército y la Armada habéis hecho profesión de fe en el servicio de la Patria, a cuantos jurasteis defenderla de sus enemi-

gos hasta perder la vida, la nación os llama a su defensa. La situación en España es cada día más crítica; la anarquía reina en la mayoría de los campos y pueblos; autoridades de nombramiento gubernativo presíden, cuando no fomentan, las revueltas; a tiro de pistola y ametralladoras se dirimen las diferencias entre los ciudadanos que alevosamente se asesinan, sin que los poderes públicos impongan la paz y la justicia. Huelgas revolucionarias de todo orden paralizan la vida de la población, arruinando y destruyendo sus fuentes de riqueza y creando una situación de hambre que lanzará a la desesperación a los hombres trabajadores. Los monumentos y tesoros artísticos son objetos de los más enconados ataques de las hordas revolucionarias, obedeciendo a la consigna que reciben de las directivas extranjeras. [...] En estos momentos [...], el Ejército, la Marina y fuerzas de Orden Público se lanzan a defender la Patria. La energía en el sostenimiento del orden estará en proporción a la magnitud de la resistencia que se ofrezca.

Asegurado el control de Canarias, Franco dejó al mando al general Orgaz para trasladarse en avión hasta Tetuán a fin de asumir la prevista dirección del ejército de África. Su misión era atravesar con esas tropas el estrecho de Gibraltar, desembarcar en Andalucía e iniciar la marcha sobre Madrid (cuyo control era vital para consolidar la situación por ser capital y centro de los resortes del estado). Sin embargo, el transporte de esas tropas decisivas se convirtió pronto en un grave problema lo-

gístico por un doble revés imprevisto. En primer lugar, porque apenas había aviones disponibles para esa labor, dado que la mayoría de los aviadores permanecería leal a la República y solo un tercio de los aparatos, todos bastante anticuados, caerían en poder de los sublevados. Y, en segundo orden, porque la flota encargada de colaborar en la tarea quedaría en manos de una marina que destruyó a los mandos conjurados tras un violento forcejeo en los buques y en la base naval de Cartagena, poniendo a casi el 70% de sus elementos al servicio del gobierno republicano e implantando un bloqueo del Estrecho más intimidante que efectivo.

En todo caso, el triunfo de la sublevación en Marruecos y Canarias fue seguido del levantamiento, con distinta fortuna, de casi todas las guarniciones militares (44 de las 53) que se distribuían en las ocho divisiones orgánicas existentes (cuyas capitales por orden de numeración eran: Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, Zaragoza, Burgos, Valladolid y La Coruña). En otras palabras: la insurrección militar se extendió como un reguero de pólvora por toda España entre el 17 y el 20 de julio, creando una fractura en el seno del ejército (integrado por unos 15.000 jefes y oficiales comandando algo más de 200.000 hombres) que sería crucial para su devenir. Según cálculos de Gabriel Cardona, se alzaron en armas un total de cuatro de los 18 generales de división que formaban la cúpula suprema del ejército español (Franco, Godel, Queipo y Cabanellas), 18 de los 32 generales de brigada, casi todos los oficiales de Estado Mayor, en torno al 80% de los oficiales y la mitad de los 60.000 efectivos de las fuerzas de orden público (algo más del 50% de la Guar-

dia Civil y de la Guardia de Asalto y solo un tercio de los Carabineros de Fronteras).

Esa fractura de las fuerzas armadas, que Franco había temido desde el principio ("No contamos con todo el Ejército", había advertido en mayo a Mola), resultó clave para el destino de la sublevación porque impidió un desenlace rápido en un sentido u otro de los posibles: o bien la victoria completa de los alzados en armas con más o menos resistencias sofocadas, siguiendo el modelo del pronunciamiento militar de Primo de Rivera de 1923, que había sido empresa unánime de toda la corporación militar; o bien el aplastamiento de los sublevados mediante el empleo masivo de la fuerza militar de un ejército unido, disciplinado y sometido a las autoridades civiles decididas y enérgicas, como había sucedido durante la tentativa golpista de Sanjurjo en agosto de 1932.

En las circunstancias de quiebra de la unidad y la disciplina de las fuerzas armadas de finales de julio de 1936, fue posible un resultado distinto: una sublevación que triunfó en casi media España, pero que fracasó en la otra mitad del país. Y ello según un patrón de conductas bien perfilado por Jorge Martínez Reverte:

Casi en toda España se produce un mismo fenómeno: cuando las fuerzas de seguridad o una parte importante de la guarnición se mantienen leales, el golpe se para. Cuando la mayoría de la guarnición se subleva, las ciudades caen del lado de los golpistas. [...] España se ve inmersa en una orgía de sangre que durará muchos meses.

En efecto, aquella sublevación militar faccional amplia pero no unánime abrió las puertas a la violencia extrema porque unos querían imponerse por la fuerza sobre otros que querían resistir y sofocar la tentativa. Y así, primero militares pero luego también civiles, los adversarios de tiempo de paz devinieron enemigos mortales de tiempo de guerra que había que tratar conforme a la suprema ley bélica: "matar o morir". La sublevación desató una violencia masiva que tendría su plasmación tanto en los frentes de combate como en las retaguardias respectivas, porque en ambas partes estaba el enemigo. El número de muertos por acción de guerra en operaciones bélicas llegaría a sumar un máximo de doscientas mil personas durante todo el conflicto. La violencia represiva en las retaguardias casi alcanzaría esa misma cifra porque estaba alimentada por la combinación letal de odio y miedo, tenía carácter estratégico y anegaría de sangre los campos y ciudades españolas, sobre todo en los calurosos meses iniciales veraniegos, testigos del "terror caliente" más atroz.

En el caso de los sublevados, como había previsto Mola, iba a ser una violencia aplicada por las tropas o colaboradores civiles (mayormente milicianos falangistas y carlistas). Pretendía "limpiar" la escoria y "depurar" el cuerpo social de la "anti-España" mediante la fulminante eliminación física de autoridades institucionales, dirigentes sociopolíticos o militantes de izquierda desateos y peligrosos. Y ello no solo para liquidar resistentes activos o potenciales, sino también para paralizar a sus seguidores, temerosos de seguir su suerte en caso de oposición manifiesta o sospechada. Azaña apreciaría la finalidad es-

tratégica de esa política represiva inclemente: "Se propone acabar con el adversario, para suprimir quebraderos de cabeza a los que pretenden gobernar". Por eso mismo, en palabras de Carlos Gil Andrés, "más de la mitad de las víctimas de la represión de los sublevados murieron en los dos primeros meses de la guerra" mediante ejecuciones militares sumarias y "paseos" irregulares que dejaron las cunetas y los cementerios repletos de cadáveres a veces insepultos durante varios días, a modo de ejemplar escarmiento público. Según los cómputos autónomos de Paul Preston, Julián Casanova o Francisco Espinosa, fueron un mínimo de 130.000 víctimas mortales: cien mil durante la guerra a medida que avanzaban las tropas y ocupaban nuevas poblaciones y otras treinta mil durante la posguerra tras la victoria.

En el caso de las zonas donde los sublevados fracasaron y un estado republicano descoyuntado sobrevivió a duras penas al catástrofe de julio de 1936, la violencia homicida desatada también fue terrible. Como señala Gil Andrés, "no fue una mera explosión de ira popular, espontánea y descontrolada", porque "en los partidos de izquierda, los sindicatos obreros y las mismas instituciones estatales hubo muchos responsables de decenas de miles de asesinatos", aun cuando las máximas autoridades de la República intentaran frenar un terror revolucionario nutrido de odio al enemigo y de miedo ante su posible victoria. Esa violencia estuvo a cargo de milicias armadas socialistas, anarquistas y comunistas. Sus objetivos prioritarios fueron, desde luego, los militares alzados que fracasaron, pero también los dirigentes políticos derechistas, los patronos sospechosos de simpatizar con la sublevación y, sobre todo, los clérigos

de la iglesia católica, erigida en perverso símbolo culpable de todo el mal acumulado durante decenios. El 80% de las muertes se registraría en los cinco primeros meses de la contienda, cuando el desplome estatal dificultó el control legal y real del orden público. La cifra final de esa cosecha llegaría a la cota de 55.000 víctimas mortales hasta la derrota de 1939, según las estimaciones de Paul Preston, José Luis Ledesma o Julius Ruiz.

En ese contexto sangriento, los éxitos más importantes de los sublevados comenzaron el mismo 18 de julio de 1936, justo a la par que Casares Quiroga anunciaba con suicida confianza que se había frustrado "un nuevo intento criminal contra la República" y predominaba "la absoluta tranquilidad" en todo el país.

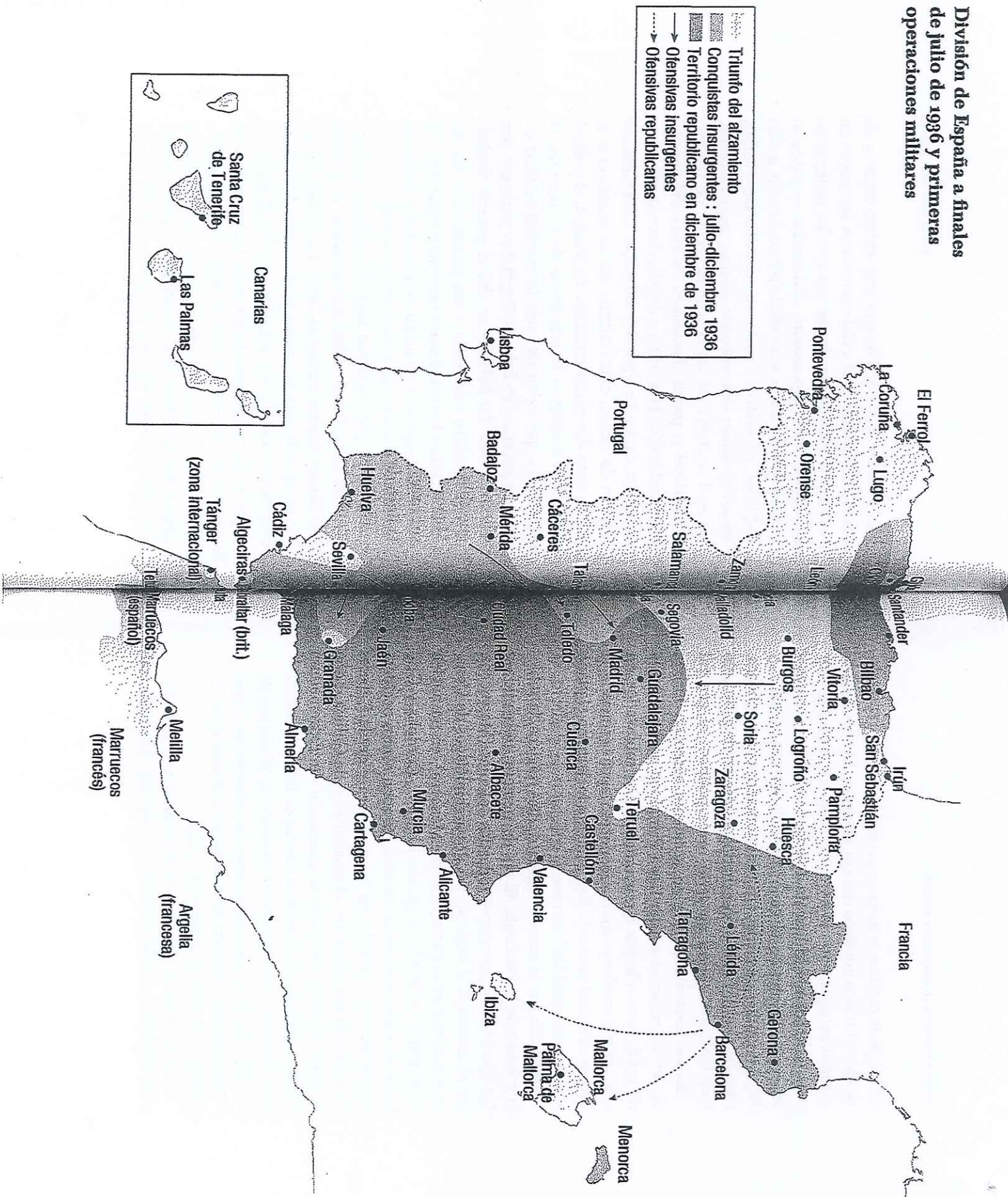
Andalucía fue la tercera región sublevada con éxito y la primera de la Península. El artífice de la operación fue Queipo de Llano, que se presentó en Sevilla en la tarde del día 18, destituyó al vacilante jefe de la división con apoyo de la mayoría de la guarnición, asumió la responsabilidad de implantar el estado de guerra y aplastó con suma violencia la débil resistencia ofrecida por los militantes de izquierdas en la ciudad y en los pueblos de la provincia. Secundando esa iniciativa, el general José Enrique Varela logró sublevar con éxito la guarnición de Cádiz y lo mismo sucedería de inmediato con las de Huelva, Córdoba y Granada, con los mismos episodios de anulación de mandos opuestos, encarcelamiento de autoridades civiles y aplastamiento violento de la resistencia ofrecida por los partidos y sindicatos obreros en la calle.

El 19 de julio la rebelión se generalizó por toda España logrando triunfos cruciales en cascada. En primer

lugar, Mola se alzó en Navarra con apoyo masivo de las milicias caristas, que colaboraron con las tropas en la reducción inclemente de las ocasionales resistencias encontradas. Simultáneamente, Cabanellas se sublevaba en Zaragoza ante la pasividad aterrada de sus masas anarquistas y lograba extender su control sobre Huesca y Teruel mediante una represión intensa. Seguidamente, el general Andrés Saliquet repetía la acción de Queipo en Valladolid y, previa destitución violenta del general Molero, sublevaba la división y desplegaba una sangrienta represión contra los opositores al golpe. Completando el rosario de éxitos, aquel mismo día se sumaban a la rebelión otras dos plazas cruciales. En Burgos, el general Fidel Dávila dominaba la resistencia de su superior, el general Batet, que había sofocado la revuelta catalana de 1934 pero permaneció fiel a la República y pagaría por ello con su vida. En Baleares se alzó el general Goded, que solo encontró resistencia a sus planes en la isla de Menorca, donde los aviadores y marineros destinados en sus bases se negaron a secundar la iniciativa y siguieron la línea de actuación mayoritaria de sus armas.

El día 20 de julio tuvieron lugar las últimas sublevaciones con éxito de los militares conjurados. El coronel Pablo Martín Alonso consiguió desde La Coruña levantar en armas a la mayoría de las guarniciones de Galicia, previa destitución de sus superiores leales al gobierno y al precio de una intensa lucha en la base naval de El Ferrol y en los barrios obreros de Vigo. Ese mismo día, tuvieron lugar otras tres incorporaciones a la sublevación de gran valor simbólico. Por un lado, el teniente coronel Camilo Alonso Vega sumaba la provincia de Vitoria al

División de España a finales de julio de 1936 y primeras operaciones militares



bando rebelde. Por otro, el coronel Antonio Aranda decantaba la ciudad de Oviedo contra el gobierno republicano. Y, finalmente, el coronel José Moscardó, director de la Academia Militar de Toledo, se alzaba en armas y se atrincheraba en el viejo Alcázar con sus hombres y medio millar de civiles afectos o tomados como rehenes.

Los grandes éxitos cosechados en ese 20 de julio solo tuvieron en contra un serio revés político: el general Sanjujo perdió la vida en accidente aéreo en Lisboa cuando trataba de viajar hasta Pamplona para asumir la dirección suprema del movimiento. Los sublevados, en suma, perdían a su líder reconocido apenas iniciada la operación y en medio de un contexto incierto en el plano militar y en el orden político.

En definitiva, después de cuatro días trágicos, la sublevación había logrado triunfar de manera indiscutida y tras varias vicisitudes en todas las colonias (Marruecos, Ifni, el Sáhara y Guinea), los dos archipiélagos de Canarias y Baleares (salvo la isla de Menorca), en un núcleo andaluz (cuyos ejes eran Sevilla, Cádiz, Córdoba y Granada) y en una amplia y compacta zona centro-occidental que iba desde La Coruña a Huesca y desde Cáceres a Tíenel y que incorporaba las regiones de Galicia, León y Castilla la Vieja, Navarra y Alava, la alta Extremadura y la mitad occidental de Aragón. Era algo menos de la mitad de toda la superficie española peninsular.

El corolario de esa afirmación es evidente. La rebelión había fracasado en el resto del territorio nacional y había sido aplastada en dos grandes zonas separadas: una estrecha y aislada franja norteña de la costa cantábrica, que iba desde Guipúzcoa en el País Vasco hasta Asturias (sal-

vo Oviedo), y un compacto territorio centro-oriental articulado por el triángulo de Madrid-Barcelona-Valencia, que incluía toda la región catalana y el resto de la costa mediterránea hasta Málaga, así como las áreas interiores desde Badajoz hasta Castilla la Nueva y La Mancha. Era algo más de la mitad de la superficie peninsular de España (véase el mapa de las pp. 96-97).

En efecto, en esas dos zonas, en parte como habían temido los mandos conjurados, la sublevación acabó siendo aplastada gracias a la acción energética de un pequeño sector del ejército y de las fuerzas de seguridad que permanecieron fieles al gobierno republicano y que pronto serían auxiliadas (incluso rebasadas) por milicias sindicales y partidistas armadas con toda urgencia. Esa combinación de tropas militares regulares y milicias civiles improvisadas resultó crucial para el aplastamiento del golpe en buena parte de las grandes ciudades (del mismo modo que su ausencia había permitido la caída en manos sublevadas de poderosos feudos sindicales como Sevilla, Zaragoza o Vigo, a título de ejemplo). Como reconocería después un periodista anarquista que participó en los combates al lado de las fuerzas de la Guardia Civil y de Asalto en Barcelona:

La combinación fue decisiva. A pesar de su acometividad, de su espíritu revolucionario, la CNT sola no habría podido derrotar al ejército y a la policía juntos. De haber tenido que luchar contra ambos, en unas pocas horas no habría quedado ni uno de nosotros.

En la capital española, el gobierno de Casares Quiroga había adoptado medidas eficaces para controlar la intenciona, contaba con la colaboración de los mandos militares (empezando por el ministro de la Guerra, general Masquelet) y tenía a su disposición más de seis mil guardias civiles y de asalto leales que casi igualaban a los siete mil soldados presentes en la provincia. Los conjurados habían tanteado sin éxito a varios jefes de la región, como sería el caso del general José Miaja o del coronel Vicente Rojo. Este último recordaría posteriormente sus discusiones con compañeros que estimaban que la situación era tan grave que “no había otra solución que la fuerza drásticamente aplicada por el Ejército” y su respuesta al diagnóstico: “era un error dividir” al ejército y “quedaban fuerzas políticas organizadas, un parlamento sin estrenar siquiera y estaba claramente manifestada la voluntad mayoritaria de la nación en las últimas elecciones”. También dejaría constancia del hecho decisivo de que sus opiniones eran dominantes en la región militar de Madrid, con su corolario:

Mis jefes naturales —ministro, inspector general del Ejército, jefe del Estado Mayor Central, comandante de la División de Madrid y el general de quien yo era ayudante— no se sublevaron.

Así pues, la cadena de mando de la división madrileña no se sublevó, aunque tuvo que hacer frente a conatos de sublevación aislados fácilmente suprimidos. El más importante se produjo el día 19, cuando el general retirado Fanjul consiguió levantar en armas a poco más de dos millares de oficiales, soldados y civiles (milicianos falan-

gistas y monárquicos) que se atrincheraron en el céntrico cuartel de La Montaña a esperar la llegada de tropas de auxilio remitidas por Mola. Pero esa ayuda no llegó y mientras tanto sus enemigos sitiaban el cuartel a la espera del asalto final.

Las derrotas cosechadas, junto con la acción de Fanjul, precipitaron la caída del ejecutivo de Casares Quiroga, que fue sustituido el día 19 por una sucesión de gabinetes que evidenciaba la profunda crisis institucional desatada en la República. Primero, Azaña encomendó a Martínez Barrio la formación de un gobierno moderado que pacatara con los insurgentes para evitar la guerra (y que tenía como ministro al general Miaja), lo que fue airadamente desechado tanto por Mola como por los partidos de izquierda. Después, al finalizar el día, Azaña entregó el gobierno a su amigo José Giral, que formó un ejecutivo de republicanos con dos militares en las carteras de Guerra (general Luis Castelló, pocas semanas después sustituido por el coronel Juan Hernández Sarabia) y Gobernación (general Sebastián Pozas). Y fue ese gobierno el que tomó una decisión crucial: licenciar las tropas (supuestamente para evitar que obedecieran a sus mandos sublevados) y autorizar la entrega de armas a los militantes de los partidos y sindicatos de izquierdas que clamaban por ellas para aplastar la sublevación.

Consagrada la decisión de combatir la rebelión con todos los medios, el 20 de julio la combinación de tropas leales y milicianos armados asaltó el cuartel de La Montaña, detuvo a Fanjul (que sería juzgado y fusilado) y masacró a la mayoría de sus defensores. El éxito gubernamental decantó toda la región castellano-manchega a

su favor, al igual que sucedió con la provincia de Badajoz (cuyo gobernador militar era el general Castelló hasta su nombramiento ministerial). Y ese éxito fue reduplicado por la victoria defensiva lograda en el frente montañoso de Guadarrama, donde la mezcla de tropas leales y milicias de izquierdas consiguió frenar las débiles columnas remitidas por Mola desde Castilla la Vieja e impedir su avance sobre Madrid.

Tampoco la región militar de Cataluña había sido escenario de una sublevación de sus mandos naturales (el general Francisco Llano de la Encomienda, jefe divisionario, y el general Jesús Aranguren, jefe de la Guardia Civil). Por el contrario, ellos y la mayoría de sus subordinados permanecieron leales a la República y fueron decisivos para sofocar los conatos de insurrección existentes a partir del día 19. La debilidad de la conjura en la capital industrial de España era tan grande que Goded se trasladó desde Palma a Barcelona para hacerse cargo de su dirección el 20 de julio, cuando ya todo estaba perdido ante la eficaz resistencia ofrecida por guardias civiles y de asalto. Al finalizar ese día, Goded se rindió y decantó la suerte de los aislados focos alzados en el resto de Cataluña. Para entonces, los militantes de los sindicatos anarquistas (y en menor medida los militantes comunistas y socialistas) ya habían conseguido apoderarse de las armas guardadas en los depósitos militares y sus milicias se convertirían en las dueñas de la región e incluso emprenderían operaciones en Mallorca y Aragón.

El tercer fracaso decisivo de la sublevación se produjo en la región militar de Valencia, gracias a la lealtad de los jefes superiores, el general divisionario Fernando

Martínez Monje y el general de brigada Mariano Gámir Ullbarri. Aunque los conspiradores tenían bastantes partidarios, sus líderes fueron indecisos (incluso el general González Carrasco, que llegó de Madrid para tratar encabezarlos), tropezaron con una resistencia militar y civil enérgica y no consiguieron romper la disciplina de unas tropas que, como medida precautoria, estuvieron dos días acuarteladas. Finalmente, el día 20, en la estela de lo sucedido en Madrid y Barcelona, Martínez Monje reunió a sus oficiales de confianza para definir su conducta y por mayoría clara optaron por permanecer leales a la República. Su decisión, después del fracaso madrileño y catalán, sentenció la suerte de la sublevación en el resto de la costa levantina y murciana.

Los restantes fracasos de la sublevación fueron menos importantes en términos cualitativos, pero no en el plano simbólico. En el sur, la mayor derrota se produjo en Málaga, que acarrió la pérdida de Almería, en parte por la resistencia de fuerzas policiales y en parte por la llegada de buques de guerra desde Cartagena que inclinaron la balanza. En el norte, también fracasaron los conatos de levantamiento en las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya, Santander y Asturias (salvo Oviedo), por esa misma combinación de resistencia militar mayoritaria, alzamiento de focos minoritarios e intervención de milicias civiles apresuradamente armadas. Así lo dejó expresado el historiador militar y excombatiente en las filas insurgentes, general Salas Larrazábal:

En Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Cartagena, en Bilbao, en Santander, en Málaga o en

Almería, ciudades todas ellas en las que triunfó el Gobierno y que en su conjunto decidieron la suerte del golpe de Estado, fueron las fuerzas armadas que permanecieron fieles al Gobierno —Ejército, Guardia Civil, Carabineros o Asalto— quienes resolvieron la situación reduciendo a los rebeldes. Como hemos dicho repetidas veces, el ambiente local influía notablemente en la moral de unos y otros y favorecía el triunfo de quienes contaran con él; las excepciones de Oviedo y Santander, de Sevilla, o Albacete, no hacen sino confirmar la verdad del aserto. Las milicias, escasamente instruidas, organizadas y armadas, pocas en número y sin cohesión ni encuadramiento, no pasaron de ser la máxima expresión de ese ambiente hostil o favorable a la rebelión; un coro activo con todo el valor ambiental que siempre prestó éste a la tragedia.

ESPAÑA PARTIDA EN DOS

Antes de cumplirse la primera semana de sublevación, los rebeldes no habían logrado derribar al gobierno republicano en la mitad del país, ni habían conseguido asumir el control del estado en todo el territorio nacional, además de perder a su líder supremo en accidente aéreo apenas cuatro días después de iniciarse el golpe. El gobierno republicano tampoco fue capaz de dominar la rebelión de manera eficaz y solo había conseguido sofocarla en media España, pero al precio de perder casi todo su ejército, tener que amarrar a milicias civiles incontroladas

y contemplar el colapso de buena parte del organigrama institucional del estado.

Fue ese empate de éxitos y fracasos casi equilibrados lo que propició la conversión del golpe militar en una verdadera guerra civil de incierto resultado y duración. Enric Ucelay-Da Cal apuntó hace ya más de un decenio con claridad ese equilibrio imperfecto de impotencias recíprocas que resultó tan trágico: los insurgentes habían sido incapaces de “llevar a cabo su golpe con efectividad en todas partes”, pero el gobierno se había mostrado igualmente incapaz “de suprimirlo por doquier”. El resultado: “No había más salida que dirimir las diferencias mediante las armas”. Y eso significaba abrir la caja de Pandora de la guerra civil con todas sus implicaciones de barbarie fratricida y avasalladora.

Los sublevados estaban decididos a emprender operaciones militares para conquistar el territorio que había escapado a su control en la primera acometida y no se resignaban a aceptar una división del país según las líneas de frente talladas aquel sofocante mes de julio (uno de los más calurosos del siglo). Por su parte, sus enemigos, cualquiera que fuera su perfil (más reformista o más revolucionario), estaban dispuestos a defenderse a toda costa y a tratar de recuperar las áreas perdidas. Así pues, a finales de julio de 1936, el balance de cuatro días de sublevación y contra-insurrección ofrecía una imagen equilibrada de fuerzas y capacidades en casi todos los órdenes: un escenario de empate inestable entre los dos bandos que iban configurándose a marchas forzadas.

El territorio decantado hacia el gobierno republicano representaba el 53,5% de toda la superficie nacional

(unos 270.000 de los 505.000 km² totales), integraba 22 de las 50 capitales de provincia y estaba habitado por 14,5 millones de habitantes (el 60% de la población española). Era, así pues, el más extenso, más densamente poblado y más urbanizado. Y era también el más industrializado (incluía la siderurgia vasca, la minería asturiana y la industria textil y química catalana), pero el de menores posibilidades alimenticias agrarias y ganaderas (exceptuando la producción horto-frutícola levantina).

El área en manos de los sublevados representaba el 46,5% de la superficie nacional (unos 235.000 km²), integraba 28 de las 50 capitales provinciales pero acogía en su seno a solo 10 millones de habitantes (el 40% del total). Era, por tanto, el territorio menor, menos poblado y más ruralizado. Contaba con una débil infraestructura industrial moderna (las minas de piritas de Huelva y las minas de hierro marroquíes), pero tenía importantes recursos alimenticios agroganaderos y pesqueros (el 70% de la capacidad de producción nacional en su conjunto: más de dos tercios del trigo y las patatas, el 60% de las leguminosas, el 75% del leche y el 70% del ganado ovino).

Sin embargo, ese reparto genérico equitativo (marcado por el contraste campo-ciudad) era de partida especialmente gravoso para el bando republicano en virtud de su escisión geográfica y de la falta de conexión entre áreas industriales y zonas de consumo. De hecho, ni el carbón asturiano ni el hierro vasco podían abastecer a la industria catalana o levantina, ni los productos de estas podían llegar a los mercados urbanos de la franja nor-teña leal. En palabras de Josep Bricall, "los rebeldes les habían arrebatado el mercado de su industria y los pro-

ductos básicos para esta industria y para el consumo de la población".

En el orden financiero, la República tenía una ventaja porque mantuvo el control del 65% de las oficinas bancarias del país, así como los depósitos centrales de los cinco grandes bancos españoles de la época. Y todavía más crucial: bajo control del gobierno quedó la mayor parte de las reservas de oro del Banco de España, cuya movilización serviría como eficaz medio de pago internacional de los suministros importados del extranjero. Mientras tanto, sus enemigos solo consiguieron controlar el 35% de las oficinas bancarias y tuvieron que paliar sus carencias financieras con el recurso al crédito exterior y orientando sus posibilidades exportadoras a la obtención de divisas aplicables a las ineludibles compras en el extranjero. Esta ventaja inicial republicana en recursos financieros (sumados a los industriales) fue pronto mermada por las difíciles condiciones internas de su economía y sus oscilaciones entre modelos de gestión revolucionaria anticapitalista y de gestión centralizada más ortodoxa, a lo que se añadió un hostil contexto internacional para sus demandas económicas. De igual modo, la desventaja inicial de los sublevados fue pronto rebajada por las asistencias crediticias logradas en el exterior (en Italia, Alemania y Portugal) y por una gestión interna centralizada y disciplinada de los recursos disponibles.

En el plano militar, según datos de Salas Larrazábal, los sublevados habían conseguido sumar a su causa a más de la mitad de los jefes y oficiales que formaban el ejército (lo que suponía unos ocho mil hombres con capacidad profesional para hacer la guerra). También lo-

graron controlar la mayor parte de efectivos de tropa de recluta obligatoria y buena parte de las fuerzas de seguridad, un conjunto de unos 140.000 hombres que incluían la totalidad de las curtidas tropas de Marruecos, con su estructura, equipo y cadena de mando operativa. Por el contrario, sus enemigos tuvieron el control nominal de otros 116.000 soldados de tropa y de algo más de 7.500 jefes y oficiales. Pero la realidad es que la decisión de licenciar las tropas destruyó el aparato de recluta militar y que solo 3.500 mandos prestaron sus servicios lealmente a la causa republicana (mientras que 1.500 perderían la vida, otros tantos serían encarcelados y en torno a mil se pasaron al enemigo en cuanto tuvieron oportunidad).

La distribución de fuerzas en la marina y en la aviación también benefició al gobierno en principio y sobre el papel. En el caso de la primera, la poderosa base naval mediterránea de Cartagena y casi el 70% de los buques quedaron en sus manos, aunque perdiera a casi todos sus jefes y oficiales por su compromiso golpista ("la escuadra la mandan los cabos", fue la noticia reveladora). Por su parte, los sublevados tenían que conformarse con la crucial base naval atlántica de Ferrol y el control de apenas un acorazado, un crucero, un destructor y otras pequeñas unidades variadas. En el arma aeronáutica, que disponía de poco más de trescientos aparatos de diferentes tipos y no muy modernos, se produjo una escisión parecida: el gobierno retuvo el dominio de 207 en tanto que los rebeldes lograron apoderarse de 96.

En todo caso, ese reparto de efectivos militares fue completado con una contribución al combate que revelaba la naturaleza civil de la contienda y el apoyo popular

del que ambos bandos disfrutaban. Como ha recordado James Mathews, en los primeros meses de la guerra, jóvenes y no tan jóvenes se aprestaron a tomar las armas de manera voluntaria para combatir: en torno a ciento veinte mil milicianos de todas las afinidades (socialistas, anarquistas y comunistas, sobre todo) en la zona republicana y aproximadamente cien mil combatientes voluntarios en la zona franquista (dos tercios de ellos falangistas y el otro tradicionalistas). Pero pronto se descubrió que la guerra no podía librarse con tan pocos hombres en armas y hubo que recurrir a la movilización forzosa de varones (entre 18 y 45 años) para mantener las operaciones y nutrir la mano de obra bélica. De hecho, los sublevados comenzaron a movilizar reclutas ya en julio de 1936 y acabarían la guerra habiendo llamado a quince reemplazos que suponían 1,2 millones de hombres. Por su parte, la República tardó meses en secundar a sus enemigos en virtud de la prevención antimilitarista de sus partidarios. Pero se rendiría a la necesidad a partir de octubre y desde entonces hasta su derrota movilizó veintiocho reemplazos que totalizaban 1,7 millones de soldados.

En resolución, a fines de julio de 1936 se habían configurado de manera apresurada y con mucha dosis de azar dos bandos enfrentados a muerte, empatados en recursos internos y que carecían del equipo militar suficiente para sostener un esfuerzo bélico de envergadura. Esa realidad, paralela a la conversión del golpe en guerra, planteó de inmediato un problema estratégico vital: en virtud de la equilibrada división de España y del previo raquitismo de su industria bélica, no cabía combatir con armas, municiones y materiales fabricados en el país. Por ese moti-

vo, el mismo día 19 de julio de 1936, los máximos líderes de ambos bandos se vieron obligados a dirigirse de inmediato al exterior en demanda de ayuda a las potencias europeas afines a sus postulados, abriendo así la vía al crucial proceso de internacionalización de la contienda española.

El recién nombrado nuevo presidente republicano, José Giral, solicitó telegráficamente el envío de aviones y municiones para sofocar la rebelión a las autoridades de París, donde hacía pocas semanas había accedido al poder un gobierno francés del Frente Popular liderado por el socialista Léon Blum. El general Franco, desde Marruecos, envió sus emisarios a Roma y Berlín solicitando también a Mussolini y a Hitler armas y aviones para transportar sus tropas a la Península y poder iniciar su marcha sobre Madrid. Esa simultánea petición de ayuda exterior suponía *de facto* el reconocimiento de las dimensiones internacionales presentes en el conflicto español y el intento deliberado de sumergirlo en las graves tensiones que fracturaban Europa. De hecho, en el contexto crítico de aquel verano de 1936, ambas peticiones iban a provocar la internacionalización de la Guerra Civil con resultados bien distintos para los militares sublevados y para las autoridades de la República.

Así pues, una España partida en dos mitades fiaba su suerte no solo al choque de las armas en suelo nacional sino también al duelo exterior en las cancillerías de las grandes potencias. Y, mientras tanto, ante el desafío imprevisto de una "guerra total", ambas partes se aprestaban a resolver tres grandes problemas generados en el plano estratégico-militar, en el ámbito económico-institu-

cional y en el orden político-ideológico. Se trataba de la triada de retos que Clausewitz había señalado como prioritarios en el sostenimiento de un conflicto bélico y que la Gran Guerra de 1914-1918 había mostrado con toda su complejidad: afinar las actividades de los militares como profesionales de las armas, modular la política de los gobiernos como gestores de los recursos disponibles y gestionar "las pasiones de los pueblos" como alimento moral y material del combate.

En el caso de España, bajo la forma de una guerra civil, en gran medida el éxito o fracaso de los respectivos esfuerzos bélicos de republicanos y de franquistas dependería finalmente de la acertada resolución de estas tres tareas básicas inducidas por la "guerra total" que siguió a una insurrección solo parcialmente victoriosa. A saber:

1º) La reconstrucción de un ejército combatiente regular, con mando centralizado, obediencia y disciplina en sus filas y una logística de suministros bélicos constantes y suficientes, a fin de sostener con vigor el frente de combate y conseguir la victoria sobre el enemigo o, al menos, evitar la derrota.

2º) La reconfiguración del aparato administrativo del estado en un sentido centralizado para hacer uso eficaz y planificado de todos los recursos económicos internos o externos del país, tanto humanos como materiales, en beneficio del esfuerzo de guerra y de las necesidades del frente de combate.

3º) La articulación de unos Fines de Guerra comparados por la gran mayoría de las fuerzas sociopolíticas representativas de la población civil de retaguardia y susceptibles de inspirar moralmente a esa misma población,

hasta el punto de justificar los grandes sacrificios de sangre y las hondas privaciones materiales demandados por una cruenta y larga lucha fratricida.

Como hemos de ver, a juzgar por el desenlace de la guerra, parece evidente que el bando franquista fue superior al bando republicano en la imperiosa tarea de configurar un ejército combatiente bien abastecido y petrechado, construir un estado centralizado eficaz para regir la economía de guerra y sostener una retaguardia civil unificada y comprometida con la causa bélica. Las razones de esa imagen genérica de superioridad franquista e inferioridad republicana a la hora de afrontar sus respectivos desafíos bélicos no fueron solo de orden interno y endógeno. Porque en la respectiva capacidad para abordar y acometer esas exigencias inducidas por la emergencia bélica influyó de manera crucial el contexto internacional que sirvió de marco a la Guerra Civil.

IV REACCIÓN Y MILITARIZACIÓN EN LA ESPAÑA INSURGENTE: LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DICTADURA CAUDILLISTA

En la parte de España donde triunfó la sublevación militar de julio de 1936, el dominio de los mandos insurgentes fue agnandose al compás de una violenta militarización de la vida sociopolítica. La movilización bélica se articuló sobre dos ideas fuerza: la defensa de la unidad de una patria española acosada y la defensa de una fe católica amenazada. Sobre esas bases ideológicas, las necesidades político-estratégicas de concentración del poder decisivo en una sola mano fueron promoviendo el encumbramiento del general Franco a la máxima magistratura de Caudillo de España. A los pocos meses del estallido de la contienda, el nuevo estado insurgente cobraba la forma de una dictadura personal que se apoyaba en tres pilares institucionales: un ejército combatiente, una iglesia militante y un partido único del estado en proceso de fascistización. La prolongación de la guerra, junto con el crispado contexto internacional, fue consolidando la situación de Franco como dictador de plenos poderes vitales, muy influenciado por la Italia fascista y la Alemania nacional-socialista.

CONSOLIDAR UNA INSURRECCIÓN MILITAR INESTABLE

Primero en Marruecos y luego en las otras zonas españolas donde los sublevados consiguieron sus objetivos

cional de Defensa que abjuraba del gobierno de Negrín y anunciaba su voluntad de negociar "una paz sin crímenes" con Franco. Durante cinco días la zona republicana vivió una pequeña pero sangrienta guerra civil en la que los casadistas se impusieron sobre los comunistas.

Con el triunfo de Casado y la proscripción del PCE quedó barrida la viabilidad de una estrategia de resistencia que ya no tenía apoyos internos suficientes ni aparentes apoyos externos inmediatos. Pero, con ese triunfo, también se reveló ilusoria la alternativa de negociar con Franco otra cosa que la rendición incondicional. Como señalaba el general Salas Larrazábal:

Ni Casado ni sus militares de carrera encontrarían mejor audiencia ante el Cuartel General de Burgos, ni Negrín modificaría la política británica de No Intervención.

En efecto, la exigencia de Franco de una rendición sin condiciones significó el fracaso político de Casado y conllevó el colapso de las instituciones republicanas. La ofensiva general franquista iniciada el 26 de marzo de 1939 no encontró oposición real y Madrid fue ocupada sin lucha dos días después. El puerto de Alicante, último reducto republicano, caería el día 31 con algo más de dos millares de personas esperando vanamente algún barco para escapar al exilio.

VI LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL: EL RENIDERO DE TODA EUROPA

La Guerra Civil surgió por causas internas, pero estuvo condicionada por el contexto internacional mediante la intervención o no intervención de las grandes potencias europeas en la lucha. Eso conforó a la contienda una importancia decisiva y dio origen a un debate que conculcó la opinión pública europea. El recurso a la petición de ayuda exterior fue simultáneo en ambos bandos por una misma necesidad: dividida España por la mitad en territorio, población y recursos, ninguno contaba con armas para sostener el esfuerzo bélico. El consiguiente proceso de internacionalización conformó condiciones ventajosas para el bando insurgente y generó lastres gravosos para el bando republicano. La decidida ayuda italo-germana y portuguesa a Franco nunca pudo ser compensada, ni en cantidad ni en calidad, por el limitado apoyo de la Unión Soviética o México a la República, que se vio privada de la asistencia de Francia y Gran Bretaña en virtud de su política de no intervención. El lento desahucio internacional de la causa republicana quedó sellado en vísperas de la guerra mundial, tras el pacto de Múnich de septiembre de 1938, que fue un golpe mortal para sus esperanzas.

UNA EUROPA INESTABLE Y CONVULSA

El 25 de julio de 1936, apenas una semana después del estallido del conflicto, *The Manchester Guardian*, un pres-

tigioso diario liberal británico, afirmaba: "El significado internacional de la guerra civil española es bastante más grande de lo que parecía en un principio". Poco después, el 8 de septiembre, otro influyente diario británico, el conservador *The Times*, corroboraba ese juicio y apuntaba el motivo: "[la guerra de España] puede considerarse como un espejo deformante en el que Europa contempla una imagen exagerada de sus propias divisiones". Ciertamente, como indicaban ambas citas, el conflicto tuvo desde el principio una dimensión internacional crucial para su desarrollo y desenlace.

Esa dimensión no era resultado de la participación de potencias extranjeras en el desencadenamiento de la contienda. No es verdad que antes del estallido de la guerra hubiera en marcha una conspiración comunista dirigida desde Moscú para propiciar una revolución social y la implantación de un régimen soviético en España (como afirmarían los militares insurgentes para justificar su sublevación como mero golpe preventivo). Antes al contrario, el Kremlin y la dirección moscovita de la Comintern, atemorizados por el peligro nazi y embarcados en la búsqueda de la alianza anglo-francesa, refrenaron sistemáticamente las ínfulas revolucionarias del pce y recibieron con aprensión las primeras noticias sobre la sublevación. Tampoco es cierto que existiera un acuerdo previo de las autoridades de Italia y de Alemania con los conjurados con el fin de apoyar la realización de su golpe militar (como sostendría la propaganda republicana a modo de consoladora explicación del alcance del fenómeno insurreccional). Los vagos contactos exploratorios de los conspiradores con los líderes fascistas y nacional-

socialistas no habían cuajado y tanto en Roma como en Berlín se vieron sorprendidos por el momento y alcance de la sublevación.

La dimensión internacional implícita en la contienda española respondía a dos razones correlativas que ya se han destacado previamente: la doble presencia de una analogía esencial y de una sincronía temporal entre la crisis bélica española y la crisis europea de la segunda mitad de los años treinta. Ambos factores fueron la causa del rápido proceso de internacionalización del conflicto (derivado de la intervención de varias potencias en apoyo a los contendientes) y del interés pasional que suscitó en la opinión pública mundial. Los respectivos frentes y retaguardias creados en España se convertirían en el "espejo deformante" que conataba el apoyo o la hostilidad de los diversos grupos sociales, ideologías políticas y potencias estatales que fracturaban el continente. Tanto para quienes percibían la contienda española como un combate frontal entre el comunismo y la civilización occidental, como para quienes la interpretaban como una batalla decisoria entre la democracia y el fascismo. Un representante diplomático británico advirtió el fenómeno con palabras reveladoras: "Por el momento, España tiene a su cargo el desdichado papel de constituir el refugio de Europa".

La analogía esencial entre la crisis española que dio origen a la Guerra Civil y la crisis europea de los años 30 permite considerar a aquella como una versión regional específica de esta. De hecho, desde una perspectiva referencial histórico-comparativa (superadora de la habitual perspectiva diferencial hispano-céntrica), es evidente que

la Guerra Civil española fue un episodio de la "crisis europea del periodo de entreguerras", que se extiende entre el final de la Gran Guerra de 1914-1918 y el estallido de la Segunda Guerra Mundial de 1939-1945.

La naturaleza general de la crisis de entreguerras que asoló Europa durante el ventenio de 1919-1939 derivaba del impacto devastador que la intensa movilización bélica había tenido sobre los fundamentos del previo orden liberal y capitalista. Como ya se ha visto, en todos los países europeos, tanto vencedores como vencidos o neutrales, se habían tenido que arbitrar soluciones de estabilización para hacer frente a los inéditos problemas sociopolíticos y desafíos económicos derivados de la experiencia de la guerra total: el arribo de la política de masas que demandaba nuevos modelos políticos de participación popular; la integración de las clases obreras reforzadas por el desarrollo industrial inducido por la guerra; la intervención masiva del estado en la economía para solventar fenómenos desconocidos como la inflación galopante y el crecimiento desorbitado de la deuda pública, etcétera (véanse pp. 43-45).

Respondiendo a esos retos aparecieron en escena en el continente los tres núcleos de proyectos antagónicos de reestructuración del estado y las relaciones sociales que pretendían estabilizar la crítica situación en beneficio de los intereses de diversos grupos sociales que servían de soporte a cada uno: el proyecto reformista democrático; la alternativa reaccionaria fascista o fascisitizante; y la propuesta revolucionaria. Serían las "Tres Erres" que iban a dominar el periodo de entreguerras y a protagonizar una esasmódica "guerra civil europea": Reforma,

Reacción o Revolución. La Europa de entreguerras se convirtió así en el violento laboratorio de experimentación política perfilado por Richard J. Overy:

La crisis del periodo posterior a 1918 tuvo más que ver con el derrumbe repentino del viejo orden político y la explosión de la política de masas que siguió a este. Había pocos deseos de restaurar los viejos sistemas, pero no existía acuerdo real acerca de cómo debía ser el nuevo orden. La democracia liberal disputaba la autoridad moral al socialismo revolucionario y al autoritarismo nacionalista y popular. [...] La amenaza que esta situación planteaba al liberalismo occidental se mostró en la rápida propagación de la dictadura, a menudo por imitación, dentro y fuera de Europa.

En todos los países de Europa, particularmente tras el impacto disolvente de la gran depresión económica de 1929, las tres alternativas habían estado presentes con mayor o menor intensidad y según el grado respectivo de modernización socioeconómica. Y en todos ellos había acabado por imponerse un modelo tras un grado mayor o menor tensión y violencia: triunfo bolchevique bajo la dirección de Lenin en la guerra civil rusa de 1917-1921 y consolidación de la urss; quiebra del orden democrático en Italia e instauración del régimen fascista por Mussolini en 1922; proclamación de la dictadura militar en Portugal en 1926; fortalecimiento de la democracia en Gran Bretaña tras el fracaso de la huelga general laborista en 1926; colapso de la república democrática de Weimar en

Alemania y acceso al poder de Hitler y el nazismo en 1933; aplastamiento de la tentativa de asalto reaccionario a la Tercera República en Francia en 1934, etcétera.

Además de esa analogía esencial entre la crisis específica española y la crisis genérica europea (que haría posible la identificación de cada bando en España con sus homólogos europeos), entre ambos procesos se produjo una conexión cronológica de enorme transcendencia: la Guerra Civil española se iniciaría en julio de 1936 y se desarrollaría hasta abril de 1939 en medio de una coyuntura europea sumamente crítica. De hecho, a lo largo del año 1936 el sistema de relaciones internacionales en el continente entraría en una fase de crisis irreversible que conduciría gradualmente hasta el estallido de otra guerra mundial en septiembre de 1939. Esta sincronía temporal entre el curso de la guerra en España y el deterioro de las tensiones europeas sería la causa generadora del impacto diplomático del conflicto español y de su rápido proceso de internacionalización.

La crisis del orden mundial que se manifestó vivamente en 1936 tenía su origen en la fragilidad del sistema de relaciones internacionales surgido tras la apretada victoria en 1918 de la coalición aliada (Gran Bretaña, Francia, Rusia y Estados Unidos) frente a Alemania y sus satélites (Austria-Hungría y el Imperio Otomano). El símbolo de dicho sistema era la Sociedad de Naciones, el nuevo organismo internacional con sede en Ginebra, y su política de seguridad colectiva mediante consultas intergubernamentales, arbitraje y recurso a sanciones colectivas (económicas o militares), en caso de agresión a cualquier país miembro. En realidad, la organización ginebrina y

el "sistema de seguridad colectiva" nunca tuvieron plena eficacia por contar desde su origen con fallas insuperables: Estados Unidos declinó integrarse y se retiró a un aislacionismo radical que no se quebraría hasta 1941, en tanto que Alemania y la Unión Soviética no serían admitidas hasta 1926 y 1934, respectivamente. Por si fuera poco, la profunda crisis económica desatada en 1929 terminaría por romper la precaria estabilidad mundial porque provocó graves desequilibrios en las relaciones interestatales y en la dinámica interna sociopolítica de varias potencias.

La principal amenaza contra el orden imperante en la Europa de entreguerras provenía de los nuevos regímenes contrarrevolucionarios y totalitarios implantados en Italia y Alemania. Como corolario a su política de reforzamiento del poder estatal, exaltación ultranacionalista, férrea disciplina social y autarquía económica, tanto la dictadura fascista como la nazi postulaban una beligerante política exterior revisionista del *statu quo*. En gran medida, sus objetivos exteriores buscaban la solución de las tensiones latentes en el interior de ambos países mediante una rectificación ventajosa de las fronteras por vía de la intimidación y la fuerza militar.

En el caso italiano, el pragmatismo desplegado por el *Duce* se combinaba con una coherencia programática: convertir Italia en la potencia dominante del Mediterráneo, contrarrestando el control naval anglo-francés en la zona y expandiendo el imperio fascista sobre el norte de África y los Balcanes. En el caso del Tercer Reich, el oportunismo del *Führer* también se combinaba con un coherente programa de expansión: Alemania habría de romper las

cadenas del tratado de paz de Versalles de 1919, implantar su hegemonía en Europa central y conquistar Rusia, para convertirse en inexpuñable potencia continental.

Las pretensiones de Italia y Alemania estaban en conflicto con los intereses de Francia y Gran Bretaña, vencedoras de la Gran Guerra. Ambas veían con prevención el revisionismo territorial nazi y el irredentismo imperial fascista. Sin embargo, también consideraban improbable una combinación hostil de ambas dictaduras porque existía un latente antagonismo en su política exterior: la voluntad alemana de anexionar Austria y lograr la hegemonía en los Balcanes se enfrentaba al propósito italiano de garantizar la independencia austriaca (como estado tapón en el norte) y de ejercer un protectorado sobre los Balcanes.

Por otra parte, el temor franco-británico a una difícil concertación italo-germana estaba eclipsado por otra preocupación fundamental: la sustitución de Rusia por la Unión Soviética tras el triunfo de la revolución bolchevique en 1917. Tanto por su naturaleza revolucionaria anticomunista, como por su ascendente en la política interior de otros estados a través de los partidos comunistas, la URSS provocaba fuertes recelos en los círculos gobernantes británicos y franceses, tanto si eran conservadores como liberales o socialdemócratas. Además, en esos medios políticos existía la convicción de que el estallido de otra guerra europea solo serviría para desencadenar nuevas revoluciones sociales y extender el comunismo, tal y como había sucedido en Rusia y Europa central entre 1917 y 1920. Y esa profunda prevención antisoviética no fue modificada por la moderación de la diplomacia soviética a partir de 1933.

En efecto, bajo la dictadura de Stalin, la política exterior de la URSS había dado un giro notable como resultado de la instauración del nazismo en Alemania, con su programa de expansionismo anticomunista. Previamente, los líderes soviéticos habían alentado la revolución mundial para sacar al régimen de su aislamiento y facilitar su difícil proceso de industrialización y colectivización. Destruída esa esperanza, la aguda conciencia de vulnerabilidad estratégica había sido agravada por el surgimiento simultáneo del peligro expansionista japonés en Asia oriental y del alemán en Europa central. El temor a una agresión combinada por ambos flancos expuestos, con la posible convivencia del resto de potencias capitalistas, había forzado a Stalin a retirar su apoyo a la revolución mundial para buscar un entendimiento con las potencias democráticas, a fin de contener la amenaza alemana y la pesadilla de una coalición de estados capitalistas contra la URSS. Esa era la razón de la política exterior soviética de defensa de la seguridad colectiva emprendida en 1934 con la integración en la Sociedad de Naciones y reforzada en 1935 con la firma de un pacto de asistencia mutua con Francia. Su complemento necesario era la estrategia comunista de frentes populares interclasistas en defensa de la democracia y en oposición al fascismo.

Dentro de ese inestable contexto, la primera sacudida al precario sistema internacional lo había dado Japón en 1931, al ocupar la provincia china de Manchuria para incorporarla a su incipiente imperio asiático, pese a las protestas de la Sociedad de Naciones. Dos años después, Hitler secundó ese desafío retirando a Alemania del organismo ginebrino y poniendo en marcha un intenso

programa de rearme que violaba el tratado de Versalles. En 1935 fue Mussolini quien socavó la seguridad colectiva al iniciar la conquista militar de Abisinia y resistir las sanciones económicas decretadas por Ginebra. Por último, en marzo de 1936, Hitler aprovechó la división creada entre Italia y las potencias democráticas a propósito de Abisinia y ordenó la remilitarización de Renania, crucial provincia fronteriza con Francia que había sido neutralizada en Versalles.

Ninguno de esos actos revisionistas, realizados *manu militari*, fue contenido de manera efectiva por Francia y Gran Bretaña. Ambas democracias seguían confiando en la posibilidad de evitar un enfrentamiento armado y lograr un reacomodo de las pretensiones italianas y alemanas dentro del concierto europeo. De hecho, los dirigentes británicos, secundados con mayor o menor entusiasmo por los franceses, habían puesto en marcha desde el principio la llamada "política de apaciguamiento" de ambas dictaduras. Era esencialmente una estrategia diplomática de emergencia destinada a evitar una nueva guerra general mediante la negociación explícita (o aceptación implícita) de cambios razonables en el *status quo* que satisficieran las demandas revisionistas sin poner en peligro los intereses vitales franco-británicos.

La base de dicha política era la convicción de que ambas democracias no tenían fuerzas para librar una guerra con tres potencias simultáneamente por varios motivos: 1º) Por la debilidad económica de ambos países como resultado de la crisis económica, que afectó más a Francia que a Gran Bretaña; 2º) Por la vulnerabilidad militar en caso de conflicto simultáneo con Japón en el Lejano

Oriente, con Alemania en Europa y con Italia en el Mediterráneo; 3º) Por la desventajosa situación diplomática de los años 30 respecto a 1914-1918: no podían contar con la ayuda vital de Estados Unidos, replegado a una posición de aislacionismo absoluto, ni tampoco con la de Rusia, convertida en un país peligroso; y 4º) Por la fragilidad política de ambos estados: la expectativa de otra guerra provocaba gran rechazo en la opinión pública franco-británica, predominantemente pacifista.

Así pues, en vísperas del estallido de la guerra española, la desintegración del sistema internacional era manifiesta. Y la respuesta del triángulo formado por las potencias europeas ante la crisis bélica en España estuvo condicionada por el perfil de su previa política exterior. La reacción anglo-francesa se subordinaría en todo momento a los objetivos básicos de su política de apaciguamiento. La respuesta soviética se enmarcaría dentro de los parámetros de su política de seguridad colectiva y búsqueda de aliados occidentales para frenar el expansionismo germano. E Italia y Alemania responderían a la crisis en virtud de su política revisionista y tratando de superar sus antagonismos mediante el reparto de esferas de influencia (primacía fascista en el Mediterráneo y nazi en Europa central).

EL DESIGUAL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL CONFLICTO

En medio de ese contexto inestable, el 17 de julio de 1936 comenzó la insurrección militar que devino pronto

Guerra Civil. Esa conversión planteó a ambos bandos un problema logístico vital: en virtud de la equilibrada división geográfica de España y del raquitismo de la industria bélica nacional, no existían medios militares necesarios para sostener un esfuerzo bélico intenso. Por eso, el mismo día 19 de julio, tanto el presidente Giral como el general Franco optaron por solicitar la ayuda urgente de las potencias europeas afines. Se abrió así la vía a un proceso de internacionalización de la guerra que tuvo resultados distintos para las autoridades de la República y para los militares sublevados.

En Francia, apenas finalizada la oleada de huelgas que precedió a la victoria electoral frentepopulista en mayo de 1936, se había formado un gobierno de coalición bajo la presidencia del socialista Léon Blum. Recibida la petición republicana, Blum decidió el 21 de julio aceptar la tras consultar con los ministros del Partido Radical, Édouard Daladier (en la cartera de Guerra) e Yvon Delbos (en Asuntos Exteriores). Sólidas razones aconsejaban esa medida al margen de preferencias ideológicas, como han demostrado David W. Pike o Juan Avilés: la República española estaba regida por un gobierno reconocido y amigo, cuya colaboración benévola sería crucial en caso de guerra europea para asegurar la tranquilidad de la frontera pirenaica y garantizar el libre tránsito entre Francia y sus colonias norteafricanas (donde estaba acuartelado un tercio del ejército francés). Sin embargo, nada más conocerse esa decisión gracias a una filtración, la opinión pública y los medios políticos franceses se dividieron profundamente. La izquierda socialista y comunista, así como la mayoría del partido radical, aprobaron

la medida. Pero las derechas, la opinión pública católica y amplios sectores de la administración civil y militar rechazaron cualquier ayuda a la República y postularon la neutralidad por un doble motivo: la hostilidad hacia los contagiosos síntomas revolucionarios percibidos en el bando gubernamental español y el temor a que la ayuda francesa desencadenase una guerra europea. El presidente de la República, Albert Lebrun, advirtió a Blum: "Eso que se piensa hacer, entregar armas a España, puede ser la guerra europea o la revolución en Francia".

Además de esta fuerte oposición interior, que halló eco en los influyentes ministros radicales (especialmente en Daladier y Delbos), Blum se topó con otra oposición igualmente decisiva: la actitud de estricta neutralidad adoptada desde el primer momento por el gobierno británico, su vital e insustituible aliado en Europa.

El gabinete conservador en el poder en Gran Bretaña, presidido por Stanley Baldwin, había visto en el estallido de la guerra española un obstáculo para su política de apaciguamiento y el peligro de un nuevo conflicto europeo. Además, debido a las noticias sobre lo que sucedía en la retaguardia republicana, las autoridades británicas estaban convencidas de que en España, bajo la mirada impotente del gobierno republicano, se estaba librando un combate entre un ejército contrarrevolucionario y unas execrables milicias revolucionarias dominadas por anarquistas y comunistas. Esa doble preocupación quedó patente en la única directriz política que Baldwin transmitió a su secretario del Foreign Office, Anthony Eden, el 26 de julio: "De ningún modo, con independencia de lo que haga Francia o cualquier otro país (léase Italia o

Alemania), debe meternos en la lucha al lado de los rusos". Puestos a escoger entre reacción y revolución, los gobernantes británicos preferían la primera porque los riesgos del triunfo de la insurrección militar con ayuda italo-germana podrían contrarrestarse con dos resortes: el poder de atracción de la libra esterlina (clave para la reconstrucción económica posbélica española) y el poder de disuasión de la Royal Navy (clave para proteger o bloquear las costas y el tráfico marítimo español).

En función de ese doble motivo (perseverar en el apaciguamiento y conjurar la revolución), y a fin de garantizar la seguridad de la base naval de Gibraltar (clave en la ruta imperial hacia la India) y de los cuantiosos intereses económicos británicos en España, el gobierno del Reino Unido decidió adoptar una actitud de estricta neutralidad. Una medida que significaba la imposición de un embargo de armas y municiones con destino a España, equiparando así en un aspecto capital al gobierno reconocido (único con capacidad jurídica para importar dicho material) y a los militares insurgentes (que carecían de esa capacidad legal). Por eso era una neutralidad benévola hacia el bando insurgente y malévola hacia la causa de la República.

La situación creada por la división interna en Francia y por la actitud neutralista británica preocupó al gobierno francés y le llevó a revocar su intención de prestar ayuda a la República. El 25 de julio de 1936, tras un intenso debate en el consejo de ministros, Blum anunció la decisión de no intervenir en el conflicto español y cancelar cualquier envío de armas al gobierno de Madrid. Creía que así contribuía a apaciguar la situación interna, a reforzar

la alianza con Gran Bretaña, a localizar la lucha dentro de las fronteras españolas y a evitar el peligro de su conversión en una guerra europea. Sin embargo, la retracción francesa, una derrota diplomática para la República, no impidió la rápida internacionalización del conflicto.

La primera petición de ayuda de Franco a Alemania no había obtenido respuesta de las cautelosas autoridades diplomáticas y militares germanas. Por eso, el 23 de julio Franco envió a Berlín a dos empresarios nazis residentes en Marnecos para solicitar el apoyo directamente a Hitler. Ambos se entrevistaron el día 25 con el *Führer* y consiguieron que aceptase la demanda. Se comprometió a enviar, secretamente y mediante una ficticia compañía privada, veinte aviones de transporte (Junker 52) y seis cazas (Heinkel 51) con su correspondiente tripulación y equipo técnico, que salieron con destino a Tetuán. Con el concurso de esos aviones y pilotos, Franco pudo organizar un puente aéreo de tropas hacia Sevilla que eludiera el bloqueo naval del Estrecho impuesto por la marina republicana y comenzar así una meteórica marcha sobre Madrid.

Los motivos de Hitler para intervenir en la guerra española fueron esencialmente de orden político-estratégico: si el envío de una pequeña y encubierta ayuda alemana favorecía el triunfo de un golpe militar, podría alterarse el equilibrio de fuerzas en Europa occidental puesto que se privaría a Francia de un aliado seguro en su flanco sur. Por el contrario, una victoria republicana reforzaría la vinculación de España con Francia y la URSS, las dos potencias que cercaban Alemania por el este y el oeste y que se oponían a los proyectos expansionistas nazis.

Además de esas ventajas, Hitler apreció la oportunidad política creada: el amago de revolución social en la República permitía presentar esa ayuda como mera reacción anticomunista y tranquilizar a Francia y Gran Bretaña sobre su naturaleza. Como ha demostrado Ángel Viñas, esa primacía de las consideraciones político-estratégicas, que revalidaban las ideológicas (el anticomunismo nazi), fueron subrayadas en las instrucciones reservadas que Hitler daría a su primer representante diplomático ante Franco, el general Faupel:

Según recuerdo, el *Filhrer* dijo, entre otras cosas, que le era indiferente el sistema político que se encontrara en España en el poder al final de la guerra, ya fuera una dictadura militar, un estado autoritario o una monarquía de tendencia conservadora o liberal. Él tenía exclusivamente como objetivo impedir que, al término de la guerra, la política exterior española se viera influida por París, Londres o Moscú, para que, en la confrontación definitiva sobre la reordenación de Europa, España no se encontrara en el lado de los enemigos, sino, a ser posible, en el de los amigos de Alemania.

Apenas decidida la intervención nazi, Mussolini adoptó una decisión similar tras recibir varias demandas de ayuda transmitidas por Franco a través del cónsul italiano en Tànger. El 28 de julio, el *Duce*, en contacto con su yerno y ministro de Asuntos Exteriores, el conde Ciano, resolvió apoyar a los insurgentes con el envío de doce aviones Savoia 81 para el traslado de tropas a Sevilla.

Paralelamente decidió reforzar la precaria situación insurgente en Mallorca con el envío de una expedición militar italiana. Tomó esas medidas gradualmente, tras conocer la decisión de Hitler, haber comprobado la división francesa y tener noticia de la neutralidad británica.

Las motivaciones de Mussolini, al igual que las de Hitler, fueron esencialmente de naturaleza geoestratégica: se ofrecía la posibilidad de ganar un aliado agradecido en el Mediterráneo occidental, debilitando la posición militar francesa e incluso británica, y todo aparentemente a bajo precio y con riesgo limitado. Además, en caso necesario, podrían camuflarse esos motivos bajo el manto de una intervención meramente anticomunista y en absoluto dirigida contra los intereses franco-británicos.

Estas primeras motivaciones de los dictadores italiano y alemán se irían ampliando a medida que su intervención aumentaba y que la guerra se prolongaba. Entonces iban apareciendo otras razones derivadas para refrendar el mantenimiento de esa política. Por ejemplo, la pretensión alemana de asegurarse los suministros de piritas y mineral de hierro español, esenciales para abastecer su programa de rearme acelerado. Igualmente, la voluntad de conversión de la guerra en un campo de pruebas militares donde sus ejércitos ensayaban técnicas y adquirían experiencia bélica con vistas al futuro: aplicaciones de la estrategia de *guerra celere* por los italianos en Málaga (febrero de 1937) y, con bastante peor fortuna, en Guadaluajara (marzo de 1937); destrucción alemana de Guernica (26 de abril de 1937), primer ejemplo de bombardeo masivo y deliberado contra objetivos civiles sin estricto valor militar directo, etcétera.

Al margen y a la par de la ayuda italo-germana, el tercer apoyo externo (primero temporal) de la rebelión militar española provino de la dictadura de Salazar. Desde principios de 1936, el gobierno portugués había experimentado un creciente temor a los efectos de la evolución española sobre la estabilidad del *Estado Novo*. El inicio del golpe ofreció la oportunidad de extirpar el peligro de contagio comunista (y democrático) mediante el apoyo a los insurrectos y Salazar no dudó en "la necesidad de consolidar su fuerza de resistencia". Portugal se convirtió así en centro de importación de armas, además de servir como vía de comunicación entre los dos iniciales núcleos aislados insurgentes. Salazar también permitió el alistamiento de voluntarios portugueses para servir con las tropas españolas (los "viriatos", que llegarían a una cifra máxima de diez mil efectivos). Y su ayuda diplomática fue igualmente decidida, defendiendo incansablemente a los rebeldes en Londres y otros foros internacionales.

LA POLÍTICA DE NO INTERVENCIÓN COLECTIVA

El comienzo de la intervención italo-germana fue descubierta por el gobierno francés (dos aviones italianos aterrizaron por error en Argelia el 30 de julio). Y dado el peligro estratégico que supondría una España hostil aliada a una potencial combinación italo-germana, Blum reconsideró su decisión de no ayudar a la República. Sin embargo, la profunda división interna en el país y la absoluta oposición del aliado británico volvieron a frenar toda medida resolutive. Tras intensos debates y con el

fin de lograr como mínimo un confinamiento real de la guerra española, el gobierno francés propuso el 1 de agosto de 1936 que las potencias europeas suscribieran un Acuerdo de No Intervención en España y prohibieran la venta y envío de armas y municiones con destino a ambos bandos.

En esencia, con su propuesta de pacto colectivo de No Intervención, Blum pretendía "evitar que otros hicieran lo que nosotros éramos incapaces de hacer"; puesto que no podían ayudar a la República, al menos intentarían evitar que Italia y Alemania colaboraran con los rebeldes. Un año más tarde, Louis de Brouckère, presidente de la Internacional Socialista y estrecho colaborador de Blum, confesaría al presidente Azaña la imposibilidad de adoptar otra política:

El año pasado, al regresar de España [Brouckère había visitado Madrid a principios de agosto], llegó a París cuando se ponía en marcha la política de no-intervención. Habló de ello con Blum toda una tarde. No podía tomar otro camino. Si hubiese dado armas a España, la guerra civil en Francia no habría tardado en estallar. Blum le dijo que no tenía seguridad del ejército. El Estado Mayor era opuesto a que se ayudase a España. La opinión se hubiera puesto en contra de Blum, acusándole de servir a Moscú. Inglaterra no le habría secundado en caso de guerra extranjera. Brouckère habla del 'miedo a Inglaterra' como uno de los motivos de aquella política.

La propuesta francesa fue inmediatamente asumida por las autoridades británicas, que vieron en ella un mecanismo ideal para preservar su neutralidad y amortiguar así las crecientes críticas de una oposición laborista solidaria con la causa republicana (no en vano, la iniciativa era del socialista Blum). Además, esa propuesta permitiría garantizar los cuatro objetivos diplomáticos establecidos por el Foreign Office en la crisis española: confinar la lucha dentro de España y, al mismo tiempo, refrenar la hipotética intervención del aliado francés en apoyo a la República, evitar a toda costa el alineamiento con la Unión Soviética en el conflicto, y eludir el enfrentamiento con Italia y Alemania por su ayuda a Franco. Por tanto, para el gobierno británico, la política multilateral de No Intervención contenía *ab initio* el germen de la imposura posterior, en la medida en que su objetivo real no era el declarado (evitar la intervención extranjera) sino la salvaguardia, por su mera existencia, de aquellos cuatro objetivos.

La diplomacia de ambas democracias desplegó un tenaz esfuerzo para lograr el concurso de todos los gobiernos europeos en esa inédita política multilateral de neutralidad cualificada (porque no suponía la retirada del reconocimiento jurídico del gobierno legal ni implicaba la concesión de derechos de beligerancia a los insurgentes). Fruto de esas gestiones, a finales de agosto de 1936 un total de 27 estados europeos (todos excepto Suiza, neutral por imperativo constitucional) habían suscrito el Acuerdo de No Intervención en España, que cobró la forma de una declaración política similar por parte de cada gobierno (no la de un tratado jurídico de obligado cumplimiento).



Poco después, los gobiernos firmantes también aceptaron constituir un comité que tendría como misión la vigilancia de la aplicación del pacto de embargo de armas colectivo. El 9 de septiembre de 1936 se formó en Londres el Comité de No Intervención bajo la presidencia del delegado británico y con la participación de los representantes diplomáticos. Inmediatamente, a propuesta británica, fue aprobado un "procedimiento de trabajo" que solo permitiría examinar las denuncias de infracción al acuerdo basadas en "pruebas sustanciales" presentadas por un gobierno partícipe (no por bandos españoles, prensa o instituciones independientes), tras lo cual se esperaría a las explicaciones del gobierno acusado "para establecer los hechos", sin provisión de sanciones en el caso de que se demostrase la veracidad de la denuncia.

Sin embargo, el triunfo de esa política de no intervención era desde el principio más aparente que real. Italia, Alemania y Portugal habían aceptado firmar el pacto y tomar parte en su comité para relajar la tensión internacional y no forzar una reacción energética anglo-francesa. Pero no tenían intención de respetar el compromiso de embargo de armas. De hecho, Mussolini comunicó de inmediato a Hitler que había instruido a su embajador en Londres para que "hiciese todo lo posible a fin de dar a las actividades del Comité un carácter puramente platónico". En efecto, Italia y Alemania continuaron enviando armas a Franco, mientras Portugal seguía prestándole un vital apoyo logístico y diplomático. Además, al tiempo que suscribían el pacto, Italia y Alemania iniciaban una coordinación de sus actividades militares en España que

abriría la vía al establecimiento de su alianza diplomática: el "eje Roma-Berlín". El 28 de agosto de 1936 se reunieron en Roma el almirante Canaris, jefe del servicio secreto militar alemán, y el general Roatta, su homólogo italiano. Entre los cruciales acuerdos adoptados en esa reunión figuraban los siguientes:

- 1) Proseguir (a pesar del embargo de armas) los suministros de material bélico y las entregas de municiones, según las peticiones del general Franco (posiblemente suministros italianos y alemanes en paridad). [...]
- 6) Envío de parte de cada uno de los dos gobiernos de un oficial (eventualmente con un ayudante) como órgano de comunicación con Franco.

En consecuencia, el continuo sabotaje italo-germano (con la colaboración portuguesa), unido a la debilidad de la respuesta franco-británica, determinaron desde el comienzo el fracaso de la política de no intervención. Apenas constituido en Londres el comité, el representante alemán remitió a Berlín un informe confidencial donde subrayaba la falta de firme voluntad anglo-francesa para detener la intervención y la naturaleza de recurso elusivo que tenía el organismo recién creado:

La sesión de hoy dio la impresión de que para Francia y Gran Bretaña, las dos potencias interesadas principalmente en el Comité, no se trata tanto de tomar medidas reales e inmediatas como de apaciguar la excitación de los partidos de iz-

quierda en ambos países mediante el mero establecimiento de tal Comité. En particular, [...] tuve la sensación de que el gobierno británico confiaba en aliviar la situación política interior del primer ministro francés con la formación del Comité.

En efecto, durante el mes de septiembre de 1936, a la sombra de las primeras deliberaciones del Comité de No Intervención, el proceso de internacionalización de la guerra había generado una estructura de apoyos e inhibiciones favorable para el esfuerzo bélico de los militares insurgentes y perjudicial para la capacidad defensiva del gobierno republicano.

Por una parte, Franco había logrado mantener intacta la vital corriente de suministros militares procedente de Italia y Alemania (concedidos además a crédito) y el inestimable apoyo portugués. Y todo ello a pesar de las prescripciones del acuerdo y de la participación de los representantes de esos tres países en el Comité de Londres.

Por otro lado, la República se había visto privada de los suministros bélicos de Francia, Gran Bretaña y otros estados europeos en virtud de la observancia del acuerdo por parte de sus gobiernos. Esta política había sido secundada por Estados Unidos, el otro gran mercado de armas disponible en el ámbito occidental. La administración del presidente Roosevelt había decretado un embargo de armas unilateral dados su tradicional alineamiento con la entente franco-británica, la tendencia aislacionista de la opinión pública norteamericana, el rechazo hacia los síntomas revolucionarios de la retaguardia republica-

na y el temor de los líderes demócratas a enajenarse el apoyo electoral católico en beneficio de los republicanos. En consecuencia, la República solo pudo contar con el apoyo abierto pero limitado del México presidido por el general Lázaro Cárdenas, que autorizó la venta de material perteneciente a su ejército y prestó apoyo diplomático. Una actitud que contrastaba con la adoptada por los otros países latinoamericanos, que oscilaron entre la neutralidad y la preferencia sin compromiso militar por uno u otro bando.

La simpatía cosechada por la República en ámbitos populares e intelectuales del mundo occidental no conllevó, sin embargo, ningún efecto práctico en los abastecimientos militares (aunque sí en el plano del reclutamiento de voluntarios extranjeros para luchar en sus filas). Esa situación impuso el recurso a las dudosas oportunidades ofrecidas por los traficantes de armas. A título de ejemplo, los agentes republicanos fueron capaces de comprar viejas armas y municiones en la conservadora Polonia a precios desorbitados (un tercio más caras que su valor de mercado) y previo pago de sustanciosas comisiones de soborno. Y el caso polaco es representativo de lo sucedido igualmente en las tres repúblicas bálticas, en Checoslovaquia o en Turquía.

Para empeorar la situación, desde mediados de septiembre de 1936, a la vista de la brutal persecución sufrida por el clero católico, el Vaticano comenzó a secundar la beligerante actitud adoptada desde el primer momento por la jerarquía episcopal española. De este modo, el catolicismo mundial pasó a convertirse en uno de los principales valedores internacionales del esfuerzo bélico

franquista, encumbrado a la categoría de cruzada por la fe de Cristo. Solo el hecho crucial de que los nacionalistas vascos, fervorosos católicos, se hubieran alineado con el bando republicano evitó una toma de partido más rotunda por parte del anciano Papa Pío XI. Su alocución del 14 de septiembre de 1936 condenó las “fuerzas subversivas” del comunismo y lamentó el sufrimiento de las víctimas de la furia antirreligiosa. El apoyo velado al bando franquista se deslizó en un cauteloso párrafo final:

Nuestra bendición se dirige de manera especial a cuantos han asumido la difícil y peligrosa tarea de defender y restaurar los derechos y el honor de Dios y de la religión, que es tanto como decir los derechos y la dignidad de las conciencias, condición primaria y la más sólida de todo bienestar humano y civil.

En su conjunto, la cristalización de esa estructura asimétrica de apoyos e inhibiciones internacionales tuvo su reflejo en el curso de las hostilidades en España, con su cosecha de recurrentes triunfos militares insurgentes y de clamorosas derrotas republicanas a lo largo de agosto y septiembre de 1936. Como resultado, las victoriosas tropas de Franco se acercaban imparables a Madrid y se aprestaban para lanzar el asalto frontal y previsiblemente definitivo sobre la capital. Parecía que la guerra iba a ser resuelta rápidamente con una tajante victoria insurgente. Sin embargo, el resultado de la batalla de Madrid significaría la conversión de una guerra supuestamente breve en una contienda de larga duración. No en vano,

la República lograría resistir el embate, mantendría el control de la capital y cosecharía así su primera y decisiva victoria defensiva. Y en ese resultado habría de tener una importancia crucial el cambio de actitud de la Unión Soviética.

EL GIRO DE LA UNIÓN SOVIÉTICA Y SUS IMPLICACIONES

Secundando la iniciativa franco-británica, la URSS había suscrito el Acuerdo y se había sumado al Comité de No Intervención sin mucha demora. Los líderes soviéticos habían percibido el estallido de la guerra como una perturbación inoportuna, ya que el amago revolucionario republicano podría arruinar su acercamiento a Francia y Gran Bretaña e incluso estrechar los vínculos de esas potencias con las dictaduras fascistas por el temor compartido a una nueva revolución en Europa. Por eso, Stalin se había limitado a declarar la "simpatía platónica" soviética por la causa republicana, permitiendo el envío de ayuda humanitaria, pero rechazando una petición de ayuda en armas remitida el 25 de julio de 1936.

La razón de esa cautelosa conducta había sido apreciada por el representante italiano en Moscú: "El gobierno soviético bajo ninguna circunstancia se dejaría involucrar en los asuntos internos de la Península (Ibérica), donde tiene mucho que perder y nada que ganar". Además, al igual que los gobernantes franceses, Stalin confiaba en que fuera posible localizar la guerra y evitar el peligro de un triunfo rebelde mediante la anulación de los suministros exteriores. Como escribió el mismo diplomático

co: "En consecuencia, la iniciativa francesa en pro de un acuerdo de no intervención en España ha sido recibida con enorme alivio". Prueba del acierto de ese diagnóstico son las instrucciones dadas por Maxim Litvinov, comisario soviético de Asuntos Exteriores, al nuevo embajador en Madrid, Marcel Rosenberg (que llegó a su destino el 31 de agosto de 1936):

Antes de que usted partiera discutimos varias veces la cuestión de la ayuda para el gobierno español, pero llegamos a la conclusión de que es imposible enviar algo desde aquí. Es ineludible explicar a los amigos que nuestras posibilidades son bastante limitadas a causa de la larga distancia, de la falta de los calibres de fusiles y cartuchos que se necesitan en España, y del peligro de que los rebeldes intercepten los transportes. Además, nuestra ayuda ofrecería a Alemania e Italia un pretexto para una intervención completamente abierta y se produciría un aprovisionamiento de los sublevados de dimensiones tales que ya no lo podríamos igualar. [...] No obstante, si se constatará y demostrara que, contrariamente a las declaraciones de No Intervención, se presta ayuda a los sublevados, podemos modificar nuestra decisión, pero también presionar al gobierno francés, que naturalmente tiene más posibilidades de ayudar que todo el resto de los estados europeos juntos.

Efectivamente, la posición inicial soviética acabaría modificándose desde principios de septiembre de 1936,

una vez demostrado el fracaso de la no intervención para detener la ayuda italo-germana a Franco. Como han comprobado Daniel Kowalsky y Yuri Rybalkin, el 14 de septiembre Stalin en persona decidió el envío directo de armamento a España y encomendó la puesta en marcha de la operación a la NKVD (luego KGB: los servicios de seguridad soviéticos). En consecuencia, a principios de octubre de 1936, en un contexto bélico crítico, la URSS comenzó a socorrer militarmente a la República sin abandonar la política de no intervención, siguiendo así los pasos italo-germanos.

Los motivos de ese giro fueron esencialmente político-estratégicos, más que el compromiso con la revolución. Stalin decidió enfrentarse en España a las potencias del eje para evitar el deterioro de la posición estratégica de su reticente aliado francés y poner a prueba la viabilidad de su estrategia de colaboración con las democracias europeas frente al peligro expansionista nazi. España habría de ser la piedra de toque de ese proyecto de gran coalición antifascista. El recién llegado embajador republicano en Moscú, Marcelino Pascua, sería informado por Stalin del carácter supletorio de esa ayuda soviética (hasta que se materializase el apoyo franco-británico) y de los límites fijados a la misma (el enfrentamiento con el bloque franco-británico y la precipitación de una guerra general):

Terminantemente, [Stalin] reitera que aquí no persiguen ningún propósito político especial. España, según ellos, no está propicia al comunismo, ni parada, para adoptarlo, y menos para imponérselo, ni aunque lo adoptara o se lo impusieran podría du-

rar, rodeado de países de régimen burgués, hostiles. Pretenden impedir, oponiéndose al triunfo de Italia y de Alemania, que el poder o la situación militar de Francia se debilite. [...] El Gobierno ruso tiene un interés primordial en mantener la paz. Sabe de sobra que la guerra pondría en grave peligro al régimen comunista. Necesitan años todavía para consolidarlo. Incluso en el orden militar están lejos de haber logrado sus propósitos. Escuadra, apenas tienen, y se proponen construirla. La aviación es excelente, según se prueba en España. El ejército de tierra es numeroso, disciplinado y al parecer bien instruido. Pero no bien dotado en todas las clases de material. [...] Gran interés en no tropezar con Inglaterra.

Bajo esas premisas, hasta que se hiciera efectivo el hipotético apoyo franco-británico, las autoridades soviéticas decidieron poner en marcha dos vías paralelas para posibilitar la resistencia de la República ante lo que parecía un incontestable avance militar de Franco: 1º) mediante la formación de Brigadas Internacionales; y 2º) mediante el envío directo de material bélico soviético.

Desde finales de septiembre de 1936, los partidos comunistas de todo el mundo (bajo la dirección de la Internacional Comunista y previa autorización de Moscú) habían iniciado el reclutamiento de voluntarios extranjeros para combatir con la República. Debido al impacto de la guerra en la opinión pública antifascista internacional, la campaña tuvo un éxito resonante. A mediados de octubre llegaron los primeros efectivos a la base española de Albacete y el 8 de noviembre, en plena batalla de

Madrid, entró en combate la primera de las Brigadas Internacionales (la XI Brigada, compuesta por unos 1.900 hombres, en su mayoría alemanes).

En conjunto, según cálculos de Rémi Skoutelesky, alrededor de 35.000 voluntarios procedentes de más de cincuenta países de todos los continentes sirvieron como brigadistas en las filas republicanas. En su seno predominaron los procedentes de medios obreros, aunque hubo abundante representación de miembros de las clases medias y círculos intelectuales. Las siete Brigadas Internacionales constituidas combatirían como fuerza de choque en casi todas las grandes batallas hasta septiembre de 1938, cuando Negrín decidió su evacuación unilateral en un intento frustrado para forzar al bando franquista a imitar esa medida. Su contribución a la capacidad de resistencia de la República fue fundamental, no tanto por su estricto valor militar cuanto por el ejemplo de solidaridad internacional que demostraban y por el modelo de disciplina que ofrecieron al ejército republicano.

El primer envío de material bélico remitido desde la URSS fue recibido en Cartagena el 4 de octubre de 1936. Desde entonces, los suministros soviéticos de aviones, tanques, ametralladoras y artillería no dejaron de afluir hasta el final de la guerra, de un modo intermitente y según los obstáculos encontrados en la ruta marítima mediterránea y en la frontera francesa con la Cataluña republicana. Al lado de ese material bélico, los soviéticos también enviaron a España un conjunto de 2.082 asesores y especialistas militares (incluyendo agentes del NKVD), que trataron de ayudar en la constitución del Ejército

cio Popular de la República y que serían discretamente retirados en el verano de 1938.

No cabe duda que los suministros militares soviéticos supusieron un refuerzo vital para la resistencia de la República. De hecho, serían su aporte fundamental de material bélico durante toda la guerra, a mucha distancia del recibido de Francia u otros orígenes. Según cálculos fidedignos, del total de aviones importados por la República durante la guerra (un máximo de 1.272 aparatos), en torno al 60% procedía de la Unión Soviética, un 21% de Francia y un 4% de Checoslovaquia. Al igual que la ayuda italo-germana a finales de julio de 1936 había salvado a Franco de una situación grave (permitiéndole trasladar el ejército de África a la Península e iniciar la marcha sobre Madrid), también la ayuda soviética contribuyó de modo decisivo a la inesperada resistencia republicana en Madrid en noviembre de 1936 (evitando la prevista derrota final en aquella crítica coyuntura).

La vinculación entre la República y la Unión Soviética se estrechó en octubre de 1936 con la decisión del gobierno republicano de depositar en Moscú tres cuartas partes de las reservas de oro del Banco de España, que había sido movilizadas desde el principio para atender a los gastos derivados de la compra de armas y suministros extranjeros. Como ya se ha apuntado (véanse pp. 33-34 y 177), las divisas generadas por esa operación de venta del oro se gastaron en compras de material bélico y pagos por servicios diversos (importaciones de alimentos, carburante, material sanitario, pago de "comisiones" de soborno a funcionarios extranjeros para conseguir permisos de exportación, etcétera). Además, según Gerald

lia) y en el oeste (frente a una Alemania revisionista) y se concentró en la fabricación de aviones en detrimento de las necesidades de la marina y la infantería. Además, la eficacia operativa del Ejército Rojo estaba disminuida por las purgas recurrentes en el mando militar.

Aparte de esas limitaciones internas, el envío de material bélico soviético a España tropezaba con obstáculos logísticos notables. Ante todo, la enorme lejanía de los puntos de suministro obligaba a un largo, costoso y arriesgado transporte por mar. La travesía por el Mediterráneo desde Crimea se enfrentaba al peligro del bloqueo de la marina franquista y del apoyo abierto de la flota italiana a esa labor de bloqueo desde sus bases en Sicilia. La travesía desde el Ártico soviético por el Atlántico exigía desembarcar el material en Francia y esperar a la imprevisible decisión de sus autoridades de autorizar, o denegar el tránsito por su frontera pirenaica hacia Cataluña. En ambos casos, la incertidumbre y falta de regularidad en los envíos afectaron a la planificación militar republicana e impulsieron una estrategia bélica defensiva que trataba de conjurar la lenta derrota mediante ofensivas por sorpresa encaminadas a aliviar la superior presión enemiga en otros frentes de operaciones. Buena prueba de la reticencia de los militares soviéticos a desprenderse de su escaso material bélico se encuentra en una carta a Stalin del mariscal Voroshilov, comisario de Defensa, en noviembre de 1937:

Te envío una lista de mercancías que podemos vender, por mucho que nos duela, a los españoles [...]. Si Francia no se porta valientemente, conseguire-

mos que todo llegue a su destino en el plazo más breve posible. Verás que la lista contiene el lote de piezas de artillería, debido no sólo al hecho de que el ejército republicano las necesita, sino también a la decisión [...] de deshacernos, de una vez por todas, de las piezas de artillería fabricadas en el extranjero [...]. Lo más doloroso de todo es el material de aviación que estamos enviando; pero, como no pueden prescindir de él en España, hay que enviarlo.

En claro contraste con las dificultades soviéticas, las remesas de material bélico desde Italia y Alemania eran más fáciles de importar en términos geográficos y pudieron ser más constantes y regulares. En esas condiciones, tras descartar la posibilidad de tomar por asalto directo la capital española, desde abril de 1937 Franco se había embarcado en una estrategia de ofensivas de desgaste masivas destinadas a conquistar gradualmente el territorio enemigo mediante el sistemático quebrantamiento de la capacidad de resistencia de un ejército mal abastecido por parte de unas tropas mejor pertrechadas y nutridas. Y como complemento de esa estrategia militar, la diplomacia franquista concentró sus esfuerzos en la preservación inalterada del cuadro internacional de apoyos e inhibiciones existentes. Para ganar su guerra localizada, Franco necesitaba el continuo desahucio de la República por parte de las potencias democráticas, sin mengua de su propia capacidad para recibir ayuda italo-germana.

Desde el verano de 1937, el deterioro progresivo de la situación militar republicana trató de ser contenido

por el gobierno de Negrín. Como corolario a su política interior de eliminación de vestigios revolucionarios y reforzamiento del poder estatal, los esfuerzos de Negrín en política internacional se dirigieron a conseguir el apoyo de las democracias occidentales y a terminar con una política de no intervención solo aplicada en realidad contra la República y sumamente lesiva para su esfuerzo de guerra. Mientras se lograba ese objetivo, la ayuda militar soviética era "la tabla del naufrago" que permitía resistir. Así lo confesaría con amargura el jefe del gobierno republicano a mediados de septiembre de 1937 a un colaborador:

Aunque me ve aparentando optimismo, no creo que saquemos nada práctico de la reunión de la Sociedad de Naciones [cuya asamblea anual se celebraba en ese mismo mes]. Alemania, Italia y Portugal seguirán ayudando descaradamente a Franco y la República durará lo que quieran los rusos que duremos, ya que del armamento que ellos nos mandan depende nuestra defensa. Únicamente si el encuentro inevitable de Alemania con Rusia y las potencias occidentales se produjese ahora, tendríamos posibilidades de vencer. Si esto no ocurre, sólo nos queda luchar para poder conseguir una paz honrosa.

Sin embargo, los esfuerzos de Negrín para lograr el apoyo de las grandes democracias fueron infructuosos porque tanto Gran Bretaña como Francia continuaron manteniendo la fachada de la no intervención como

mecanismo óptimo para confinar el conflicto español y evitar su conversión en una guerra europea. En julio de 1937, el ministro de Asuntos Exteriores francés había confesado al embajador estadounidense en París la supeditación francesa del "problema español" a los objetivos del apaciguamiento:

Por lo que respecta al futuro, la posición que tomará Francia dependerá por completo de la posición de Inglaterra. Francia no emprenderá la guerra con Alemania e Italia. La posición de Francia será la misma que su posición en el asunto español. Si Inglaterra decide estar firme al lado de Francia frente a Alemania e Italia, Francia actuará. Si Inglaterra continúa mostrándose distante, Francia no podrá actuar. En ningún caso se encontrará en la posición de tener a la Unión Soviética como su único aliado.

Los gobernantes británicos, con el apoyo francés, solo se permitieron adoptar una postura de firmeza en septiembre de 1937, cuando los ataques indiscriminados de submarinos italianos contra los barcos mercantes que traficaban con la República superaron el límite aceptable, extendiéndose por todo el Mediterráneo y poniendo en peligro la navegación en dicho mar. Entonces, por iniciativa franco-británica y con apoyo soviético, tuvo lugar en Nyon (cerca de Ginebra) una conferencia de potencias ribereñas del Mediterráneo destinada a garantizar el tráfico y a terminar con los ataques de "submarinos piratas" (eufemismo para no acusar a la flota italiana).

recursos financieros para hacer frente a los gastos de guerra.

En definitiva, entre octubre de 1936 y enero de 1937 se había producido un cambio fundamental en el escenario internacional de la guerra española. El compromiso soviético en favor de la República y la intensificación del apoyo del eje al general Franco culminaron el proceso de internacionalización. A partir de entonces, el cuadro de apoyos militares y diplomáticos quedó configurado y se mantuvo inalterado hasta el final. Por un lado, el bando franquista siguió contando con el vital apoyo de la Italia fascista, la Alemania nazi y el Portugal de Salazar (amén del aliento moral y humanitario del catolicismo mundial). Por su parte, la República se basaba en el apoyo soviético y recibía de Francia una pequeña ayuda encubierta e intermitente (que Blum calificaría de “no intervención relajada”: la tolerancia hacia el contrabando de armas por la frontera pirenaica). Mientras tanto, el resto de los países europeos, encabezados por Gran Bretaña, seguían adheridos al Acuerdo de No Intervención y respetaban su embargo de armas y municiones.

Precisamente por iniciativa británica y con el concurso franco-soviético, a lo largo del primer semestre de 1937, el Comité de No Intervención hizo varios esfuerzos para detener la escalada intervencionista mediante la imposición de un complejo control naval y terrestre de fronteras españolas (a cargo de observadores neutrales y de una flota compuesta por buques británicos, franceses, germanos e italianos). Su propósito era convertir en realidad efectiva el confinamiento de la guerra, evitando la llegada de suministros bélicos exteriores en gran escala y sin camuflaje.

Sin embargo, desde el crítico verano de 1937, incluso ese tímido esfuerzo de control fue abandonado por el deliberado sabotaje italo-germano y la consecuente reacción anglo-francesa. En adelante, la idea de su restauración, combinada con una retirada supervisada de los combatientes extranjeros, permanecería como pretexto político para justificar la vigencia del acuerdo y la existencia del comité. La política colectiva de No Intervención se había convertido en una farsa institucionalizada. Así lo entendieron los nuevos mandatarios de la entente franco-británica: el conservador Neville Chamberlain (que sucedió a Baldwin en mayo) y el radical Édouard Daladier (que sucedería a Blum meses después).

EL LENTO DESAHUCIO INTERNACIONAL DE LA REPÚBLICA

En efecto, a partir de la crisis del verano de 1937, el relativo equilibrio de fuerzas militares logrado entre los dos bandos españoles fue decantándose progresivamente en meses sucesivos a favor de Franco y en contra de la República. La causa principal de ese proceso residiría en la firme reactivación del apoyo bélico de las potencias del eje al bando nacionalista, en una medida que no pudo ser compensada por los envíos militares soviéticos ni por el contrabando de armas.

La Unión Soviética no era entonces una gran potencia militar. A pesar de sus grandes reservas de tierras y hombres, su producción industrial bélica era incapaz de atender todos sus compromisos defensivos en el este (frente a un Japón que estaba en guerra contra China y Mongo-

Howson, esas compras bélicas a la URSS incluyeron buena dosis de material anticuado y fueron pagadas al contado a precios de mercado internacional. Así pues, cabe desmentir el mito propagandístico franquista del "oro de Moscú" robado por los republicanos y entregado a Stalin sin contrapartida. De hecho, el mismo destino había corrido el resto de las reservas de oro, vendida al Banco de Francia y cuyo contravalor sirvió para pagar suministros procedentes de dicho país. Por motivos obvios de interés político, sobre ese "oro de Francia" no se hizo igual campaña de propaganda.

El apoyo militar y financiero que la URSS comenzó a prestar a la República desde octubre de 1936 tuvo dos consecuencias igualmente negativas para sus objetivos diplomáticos. Por un lado, la intervención soviética en el otro extremo de Europa acentuó la ansiedad franco-británica sobre las verdaderas intenciones de Moscú, reforzando su compromiso no intervencionista. Por otro, sirvió como pretexto para que las potencias del eje procedieran a un incremento cuantitativo y cualitativo de su ayuda a Franco. En ese proceso naufragó definitivamente la política de no intervención colectiva.

Para compensar militarmente la decisión soviética, Hitler decidió a finales de octubre de 1936 el envío de una unidad aérea alemana que combatiría en las filas nacionalistas como cuerpo autónomo, con sus propios jefes, pero en contacto directo con Franco. La "Legión Cóndor" arribó a España por vía marítima y llegará a contar durante toda la guerra con unos efectivos de 19.000 soldados alemanes (pilotos, tanquistas, artilleros y expertos en comunicaciones), si bien nunca superó la ci-

fra de 5.600 hombres en un mismo momento. Su fuerza aérea se mantuvo regularmente en torno a 140 aviones de modo permanente. Como tal unidad tomó parte en casi todas las operaciones desarrolladas hasta el final de la guerra.

La respuesta italiana fue ligeramente posterior a la alemana pero la superó en número e intensidad, en consonancia con el mayor interés político-estratégico manifestado por Roma. El 28 de noviembre de 1936 Mussolini y Franco habían firmado un tratado secreto de amistad que estipulaba su "estrecha cooperación" diplomática, el respeto italiano a la integridad española y la adopción por España de una generosa "actitud de neutralidad benévola" hacia Italia en caso de guerra. Tras esa firma, entre diciembre de 1936 y enero de 1937 Mussolini envió a Franco un cuerpo de ejército expedicionario: el *Corpo di Truppe Volontarie*. El CTV agrupaba de modo permanente unos 40.000 soldados italianos y su número total ascendió a lo largo de toda la guerra a 73.000 hombres. Si a esa cifra se añade la fuerza aérea enviada en paralelo (la "Aviación Legionaria"), compuesta por 6.000 hombres, el número total de efectivos italianos en España alcanzaría los 79.000 hombres hasta el final del conflicto.

Así pues, Italia y Alemania habían decidido seguir prestando masivamente ayuda militar a Franco siempre que la misma no superara el límite de la permisividad táctica británica ni precipitara el estallido de una inminente guerra general. Una ayuda, además, prestada a crédito en condiciones ventajosas, lo que resultó esencial para los insurgentes puesto que no contaban con

Con exclusión de la República y sin participación de Italia, la conferencia encomendó a las marinas británica y francesa la vigilancia de las rutas comerciales mediterráneas, con autorización para hundir cualquier submarino agresor del tráfico mercante.

La respuesta franco-británica en Nyon, apoyada por todos los estados del Mediterráneo, puso límites precisos al apoyo italiano a Franco que Mussolini comprendió. A partir de entonces, la guerra española se convirtió en un escenario marginal de la tensión diplomática porque las miradas fueron concentrándose en los retos derivados de la expansión alemana en Europa central.

A mediados de marzo de 1938, Hitler procedió a anexionar Austria al Tercer Reich, sin réplica militar de las potencias democráticas y previo consentimiento italiano. La única reacción al golpe de fuerza nazi fue la decisión francesa de abrir *de facto* su frontera con Cataluña al paso de material bélico soviético con destino a la República. La medida permitió entrar por esa vía terrestre los suministros militares suficientes para contener la ofensiva que Franco había lanzado a principios de marzo en todo el frente de Levante y que había logrado partir en dos el territorio republicano a mediados de abril de 1938. Del mismo modo, el material recibido hizo posible lanzar a finales de julio la inesperada ofensiva en el río Ebro y frenar así el avance franquista sobre Valencia.

Sin embargo, la presión de las autoridades británicas logró que París aplacase sus temores y aceptara clausurar la frontera pirenaica el 13 de junio de 1938. Chamberlain había convencido a Daladier de que la victoria de Franco no sería un grave problema por varios motivos: 1º) El

agotamiento humano y las destrucciones bélicas harían imposible que Franco participara en un conflicto europeo incluso si quisiera; 2º) Franco necesitaría recurrir al crédito británico para financiar el proceso de reconstrucción económica de posguerra; y 3º) La vulnerabilidad militar española ante la flota anglo-francesa era tan patente que bastaría para disuadir a Franco de cualquier tentación hostil.

Frente a esas razones que mitigaban el temor a la victoria franquista, la continuación de la guerra era peligrosa porque dividía a la opinión pública democrática e impedía separar a Italia de Alemania y restar fuerza a esta en sus pretensiones sobre Europa central. En definitiva, la entente franco-británica consideraba que la República podía ser sacrificada sin excesivo riesgo en beneficio de la colaboración italiana y la preservación de la paz continental.

Desde el momento en que se cerró la frontera francesa, la República vio cortada su última y vital línea de suministros militares y alimenticios exteriores. El golpe de gracia a su esperanza de recibir apoyo de las democracias se produjo durante la crisis de septiembre de 1938, originada por la presión de Hitler sobre Checoslovaquia para que cediera de inmediato los Sudetes (zona habitada por mayoría de población alemana). El triunfo nazi fue sancionado por el acuerdo de Múnich firmado el 29 de septiembre por Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia, que implicaba la desmembración de Checoslovaquia a cambio de una promesa alemana de paz y de negociación futura de cualquier cambio territorial. El acuerdo parecía configurar el Pacto Cuatripartito (sin la urss) que Gran Bretaña había perseguido siempre y significaba la

culminación (aparentemente triunfal) de la política de apaciguamiento.

La resolución de la crisis germano-checa en Múnich dio al traste con las esperanzas republicanas porque dejó claro que las potencias que no habían combatido por Checoslovaquia tampoco iban a hacerlo por España. Ese negro horizonte internacional agudizó la desintegración política de la República, acentuando el enfrentamiento entre partidarios de continuar la lucha y sectores proclives a negociar la rendición con aval de las potencias occidentales. Esa situación permitió que el triunfal avance franquista sobre Cataluña terminara con el colapso completo de la resistencia militar republicana.

En efecto, a finales de marzo de 1939, tras el breve episodio de guerra intestina en las filas republicanas, las tropas de Franco ocuparon todo el territorio español y dieron por finalizada la Guerra Civil con una victoria incondicional. Para entonces, la tensión europea había enfilado la recta hacia el estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. Apenas cinco meses después de terminada la contienda en España estallaría la guerra europea que tan laboriosamente había evitado (o aplazado) la política de no intervención.

No cabe duda razonable de que el contexto internacional determinó de modo crucial el curso de la Guerra Civil y su desenlace. Los condicionamientos externos plantearon ventajas notorias e impusieron servidumbres sustanciales a cada uno de los bandos, que trataron de utilizarlos o sortearlos a fin de engrosar su capacidad de acción militar, acrecentar la eficacia de su aparato estatal para aprovechar sus recursos y fortalecer la moral com-

batiante de su población civil. Sin la constante ayuda militar, diplomática y financiera de la Alemania nazi y la Italia fascista, es harto difícil creer que Franco hubiera podido obtener su rotunda victoria. De igual modo, sin el asfixiante embargo de la no intervención y la inhibición de las grandes democracias occidentales, con su gravoso efecto en la capacidad defensiva, disponibilidad material y fortaleza moral, es poco probable que la República hubiera sufrido una derrota militar tan total. Así lo registró en un informe reservado el agregado militar británico en España:

Es casi superfluo recapitular las razones [de la victoria de Franco]. Estas son, en primer lugar, la persistente superioridad material durante toda la guerra de las fuerzas nacionalistas en tierra y en el aire, y, en segundo lugar, la superior calidad de todos sus cuadros hasta hace nueve meses o posiblemente un año. [...] La ayuda material de Rusia, México y Checoslovaquia nunca se ha equiparado en cantidad o calidad con la de Italia y Alemania. Otros países, con independencia de sus simpatías, se vieron refrenados por la actitud de Gran Bretaña.

La ofensiva final franquista emprendida el 26 de marzo no encontró oposición en ninguna parte. Madrid fue ocupada dos días después y el 1 de abril de 1939 Franco firmaba en Burgos su último parte de guerra victorioso:

En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. El Generalísimo, Franco.

VIII VENCEDORES Y VENCIDOS: EL COSTE HUMANO DE LA GUERRA CIVIL

La violencia desencadenada por la guerra produjo una cosecha de 350.000 víctimas mortales directas. Buena parte no perdieron la vida en operaciones militares, sino en acciones de represión en retaguardia mediante "paseos" informales o juicios formales. Víctimas de la primera modalidad fueron el poeta Federico García Lorca, asesinado en Granada por los militares sublevados en agosto de 1936, y el dramaturgo Pedro Muñoz Seca, asesinado en Paracuellos del Jarama por milicianos anarquistas y comunistas en noviembre de 1936. La segunda se cobró la vida del general Godea, sublevado sin éxito en Barcelona, y fusilado tras consejo de guerra en agosto de 1936 por delito de rebelión; y la del general Bate, que se negó a sublevarse en Burgos y fue fusilado tras consejo de guerra en febrero de 1937 por igual delito de rebelión. A esos muertos por acción de guerra o represión se sumó el casi medio millón de personas que partieron al exilio al término de la guerra, la mayoría para no volver nunca más a su tierra natal. Esas pérdidas humanas reduplicaban la destrucción material inducida por la contienda en todos los ámbitos de la vida: lastres demográficos, carencias productivas, penurias alimenticias, emergencias sanitarias...

COMBATES, REPRESIONES Y PRIVACIONES: LOS MUERTOS DE LA GUERRA

1939 fue el “Año de la Victoria” para el régimen franquista. Contra todos los pronósticos, y a pesar de la tenaz resistencia ofrecida por sus enemigos, la sublevación emprendida tres años antes había logrado un triunfo incondicional. Las variadas razones de ese resultado final han sido analizadas en las páginas precedentes. Pero cabría reproducir a modo de resumen el balance apuntado ya en 1979 por Raymond Carr y Juan Pablo Fusi:

¿Por qué ganaron los nacionalistas? La respuesta, como en todas las guerras, es: un liderazgo y una disciplina superiores en el Ejército, y un esfuerzo militar respaldado por un gobierno de guerra unificado. Los nacionales fueron mejor ayudados que la República por sus simpatizantes extranjeros en cuanto a suministros de armas: la Legión Cóndor alemana y las tropas y el material italianos compensaron sobradamente la ayuda soviética al Frente Popular, que tan vital fue en las primeras fases de la guerra. [...] La disciplina militar de los nacionales era un reflejo de su unidad política; la debilidad militar del Frente Popular una consecuencia de sus luchas políticas intestinas.

Pero si 1939 fue el “Año de la Victoria”, también fue “el año más terrible de nuestra historia” (palabras de Francesc Vilanova). No en vano, con la llegada de la victoria, que no fue propiamente la llegada de la paz, llegó también la

hora de hacer balance de pérdidas humanas y materiales. Y el saldo resultante fue aterrador y, peor aún, sus efectos continuaron su curso durante bastantes años.

Ya en la guerra fue habitual cifrar el impacto demográfico de la contienda en el mítico “un millón de muertos”; lo apuntaba así el cardenal Gomá en una carta pastoral de 1937 y lo haría popular el éxito de la novela homónima de José María Gironella en 1961. Pero la realidad es diferente según todos los cálculos demográficos recogidos por Fuentes Quinana, Martín Aceña y Sánchez Astain.

Con márgenes de error inevitables, esas estimaciones coinciden en indicar que el trienio 1936-1939 fue terrorífico y registró las siguientes víctimas mortales en diferentes categorías: 1º) Entre un mínimo de 150.000 y un máximo de 200.000 muertos en acciones de guerra directamente (combates, operaciones bélicas, bombardeos, etc.); tres quintas partes de caídos en el campo republicano y el resto en el campo franquista (y sin contar los muertos por acción guerrillera y contra-guerrillera después de 1939: aproximadamente 500 y 2.000 víctimas, respectivamente). 2º) Alrededor de 155.000 muertos en acciones de represión en retaguardia: cien mil en la zona franquista y el resto en la zona republicana (y teniendo en cuenta que esta cifra no computa los 30.000 muertos por represión franquista en la posguerra). Y 3º) En torno a 346.000/380.000 muertos por sobre-mortalidad durante el trienio y respecto al periodo anterior, derivada de enfermedades, hambrunas y privaciones inducidas por la contienda.

Así pues, ese volumen global de pérdidas humanas suma entre un mínimo de 651.000 y un máximo de

735.000 víctimas de la Guerra Civil en todas sus facetas. Y si bien esas cifras no llegan al mítico millón de muertos, siguen representando un porcentaje altísimo de la población española: entre el 2,63 y el 2,97% de los 24,69 millones de habitantes registrados en España en 1936. Nada menos.

Por si fuera poco, a esa abultada cifra de víctimas habría que añadir otras dos categorías de pérdidas perfladas por los estudios demográficos y cruciales para el desenvolvimiento socioeconómico del país: 1º) El desplome de las tasas de natalidad, que provocó una reducción del número de nacimientos respecto a épocas previas que se ha situado entre 400.000 y 600.000 niños "no nacidos" durante el trienio bélico. Una cifra impresionante que superaba a las víctimas mortales por combates y represiones y que dejaría su impronta en la pirámide de la población española durante años. 2º) El incremento espectacular en el número de exiliados que abandonaron el país, ya fuera de manera temporal (quizá hasta 734.000 personas en diferentes fases) o ya fuera de forma definitiva (entre un máximo de 300.000 y un mínimo de 200.000 personas: el llamado exilio republicano español de 1939).

Con harta razón, por tanto, se ha considerado la Guerra Civil como "el fenómeno más negativo" de la historia demográfica contemporánea de España. Y su efecto lesivo brutal puede medirse atendiendo a la evolución de un indicador sociográfico ilustrativo, como es la esperanza media de vida al nacer de cualquier español de entonces. En el caso de los hombres, ese indicador pasó de estar en 50,8 años en 1935 para desplomarse hasta 43,1 en 1939.

En el caso de las mujeres, el indicador pasó de 54,6 años en 1935 para rebajarse hasta 51,8 en 1939. También puede apreciarse el efecto devastador de esas pérdidas en el volumen y formación del capital humano: como resultado de las bajas tasas de escolaridad durante el trienio y del desplome de infraestructuras y servicios educativos (por destrucción, represión y exilio de maestros o recorte de inversión), el tajo educacional fue realmente notorio. La generación nacida en 1931 (que entraría en la escuela después de la guerra) volvió a situarse en niveles de escolarización y alfabetización de principios del siglo XX.

Víctimas de la guerra, pero ya solo de un bando, fueron también las personas que a partir de la victoria de 1939 hubieron de pagar su simpatía hacia la República. Cálculos fidedignos estiman que en 1940 había en España no menos de 300.000 prisioneros hacinados en casi 500 cárceles o prisiones habilitadas para acogerlos (cuando el promedio de encarcelados "comunes" en el trienio 1931-1934 no llegaba a las 9.500 personas). Y a esa cifra habría que sumar el mínimo de 400.000 personas (básicamente soldados republicanos) internadas durante meses en el centenar de campos de concentración existentes en el país para fines de clasificación y depuración de responsabilidades políticas. Un volumen de población reclusa o concentrada que se convertiría pronto en una severa carga para la administración estatal y en un grave lastre para la recuperación de la actividad laboral.

En definitiva, la guerra ocasionó víctimas mortales, sufrimientos inerrables, penas profundas y muchas privaciones y sinsabores entre la población española. En 1939, ya instalado en el exilio en Francia y poco antes de

su muerte, Azaña meditaba sobre aquella tormenta de fuego y apuntaba que su origen estaba en "el odio y el miedo": "Una parte del país odiaba a la otra, y la temía". Y proseguía que la consecuente "política de exterminio y venganza" desatada con la guerra había centrado su furia destructora en los grupos sociales más temidos u odiados en cada bando, dando origen a una represión inclemente y brutal retroalimentada:

En el territorio ocupado por los nacionalistas fir-
silaban a los franc-masones, a los profesores de
universidad y a los maestros de escuela titulados
de izquierdismo, a una docena de generales que se
habían negado a secundar el alzamiento, a los di-
putados y exdiputados republicanos o socialistas,
a gobernadores, alcaldes y a una cantidad difícil-
mente numerable de personas desconocidas; en el
territorio dependiente del gobierno de la Repúbli-
ca, caían frailes, curas, patronos, militares sospe-
chosos de 'fascismo', políticos de significación de-
rechista. Que todo esto ocurriera, en su territorio,
contra la voluntad del gobierno de la República, es
importante para los gobiernos mismos [...]. Pero
si las atrocidades cometidas en uno y otro campo
se consideraran [...] como un fenómeno patológico
en la sociedad española, el valor demostrativo de
unos y otros hechos viene a ser el mismo: su carác-
ter, mucho más entristecedor.

El juicio anticipado por Azaña, como hemos visto, ha
sido básicamente corroborado por la investigación histó-

rica reciente. Pero no solo la represión, como víctima o
como verdugo o como ambas cosas en distintos momen-
tos (que también hubo muchos casos), fue el santo y seña
de la guerra para la mayoría de la población española.
Aunque sin duda fuera esa su faceta más definitoria del
carácter "civil" del conflicto. Hubo también otras viven-
cias más o menos traumáticas pero igualmente indelebles
porque dejaron huella profunda en los españoles que vi-
vieron la guerra y sobrevivieron para contarla.

Por ejemplo, para los combatientes de ambos bandos
que libraron las batallas y soportaron sus rigores, la gue-
rra fue una cotidiana anormalidad que dio origen a su
propio mundo autónomo de relaciones, sensaciones y
temores: la vida de las trincheras, el campamento y el
batallón, extraña escuela de fraternidad, entereza y bas-
tante brutalidad, en un sentido muy lato pero vívido para
los varones que pasaron por ella.

Siendo en su mayoría reclutas forzados, no combatien-
tes voluntarios, tuvieron que adaptarse a las circunstan-
cias aun a costa de matar para vivir, como demandaba la
ley bélica imperante. Y a todos les preocupaba el futuro
de sus vidas, la posibilidad de perderlas, la situación de
sus familias, la razón o sinrazón de su causa... Y otras
cosas más prosaicas: cómo resistir el sofocante calor del
día (como en Brunete, donde se alcanzaron los 40 grados
diurnos durante la batalla); cómo protegerse del intenso
frío de las noches (como en Teruel, donde se luchó con
gélidas temperaturas bajo cero); cómo defenderse del
ataque mortificante de las pulgas y piojos; cómo aplacar
el intenso miedo al combate que provocaba náuseas, dia-
reas y ganas de desertar; cómo saciar la sed cuando es-

caseaba el agua; cómo soportar la muerte del compañero apreciado y seguir en la brecha, etcétera. En este plano, los tres años de guerra dieron para mucho. Y mientras unos respondieron a los retos planteados con estoicismo, llegando incluso a la categoría de héroes admirados, otros sucumbieron a la carga y cosecharon su pena: los reos de desertión o traición, los "emboscados" que rehúan el frente con excusas, etc.

Para la población no combatiente de la retaguardia civil, la guerra también generó ocasiones combinadas de alegría (al saber que el ser querido estaba vivo) o sufrimiento (al enterarse de su muerte), casi con tanta intensidad o más que en el frente de batalla. Sin descontar el hecho de que no era lo mismo afrontar la guerra siendo un anciano al borde de la muerte que un niño apenas asomado a la vida. En todo caso, según los testimonios recuperados, dos elementos provocaron la mayor angustia recurrente: el terror ante los devastadores bombardeos de la aviación o de la artillería pesada sobre ciudades y pueblos; y la aguda sensación de hambre y privaciones insuperables. Las palabras de una niña madrileña podrían ser elevadas a categoría explicativa general de los sufrimientos de la población civil:

Todo el día soñaba con la comida. Mi madre perdió 30 kilos y mi abuelo murió de desnutrición. Hablábamos siempre de lo que nos gustaría comer, si pudiéramos. Mi hermana y yo con las amigas jugábamos a recordar cómo era un buen cocido, cómo tomar unos huevos.

Es, claro está, el relato de una impresión personal derivada de una vivencia íntima. Pero es también la expresión de un proceso bien descrito por el doctor Francisco Grande Covián, que estuvo al frente desde 1936 de los abastecimientos madrileños y vigilaba los problemas de nutrición creados por la escasez de alimentos y su repercusión sanitaria. A tenor de sus estudios, la población de Madrid, como la de casi toda la España republicana, llegó a pasar hambre: sobre la base de una dieta mínima promediada por habitante de 2.131 calorías diarias, los madrileños solo fueron capaces de recibir el 49,7% de ese parámetro (1.060 calorías diarias). Era una dieta inferior a la soportada por los berlineses en 1916, durante la guerra mundial, cuando el bloqueo naval británico empezó a dejarse notar en toda Alemania. Y estaba en el origen del aumento de enfermedades (pelagra, glositis, edema de hambre) y de las tasas de mortalidad (sobre todo infantil) que se registraba en el seno de esa población desnutrida y sometida a todo tipo de privaciones.

Afortunadamente para la población civil en zona franquista, no puede decirse que esa situación de hambruna angustiosa fuera un rasgo característico de sus vivencias durante la contienda de modo general (otra cosa serían los desastres y represallados). Solo a partir de 1939, ya terminada la guerra, el hambre habría de enseñorearse de toda España en su conjunto, sin distinguir entre ambas zonas ni entre ambas poblaciones (aunque sí entre grupos sociales más o menos acomodados).

Si del ámbito humano pasamos a las consecuencias en el plano material, también cabe decir que la Guerra Civil fue "el fenómeno más negativo de la historia económica

contemporánea de España". En conjunto, es probable que el producto interior bruto nacional se desplomara un 20% entre 1935 y 1940, mientras que la caída de la producción agraria llegaba a superar el 21% y la de la producción industrial rozaba el 30%.

Además de esas pérdidas macroeconómicas tan severas, el destrozo de la infraestructura productiva había sido también profundo. Aproximadamente medio millón de viviendas del parque inmobiliario nacional había sido destruido o dañado gravemente, al igual que una cuarta parte de la flota mercante. Más crucial resultó la pérdida de capacidad del vital transporte ferroviario: quedaron inutilizados el 30% de las locomotoras y el 40% de los vagones de mercancías. El balance final que recoge Joan R. Rosés sobre el efecto de la guerra en la economía española no ofrece dudas:

El coste total de la guerra equivale a algo más del producto interior bruto del año 1935. Además su impacto se prolongó durante dos décadas, ya que la economía española no recuperó su tendencia de crecimiento hasta 1956. Considerando la guerra y la larga recuperación de la posguerra, los españoles de la época sacrificaron algo más de cinco años de renta.

LA ESPAÑA DEL EXILIO

Como hemos visto, en los primeros meses invernales de 1939, casi medio millón de españoles abandonaba forzo-

samente la tierra en la que había nacido para empezar un largo exilio que habría de durar, para muchos, el resto de sus vidas. Eran los heterogéneos y desafortunados protagonistas, anónimos y reputados, hombres y mujeres, ancianos y niños, catalanes o asturianos, civiles o militares, jornaleros agrarios o catedráticos universitarios, del "exilio republicano español".

El éxodo había comenzado ya en el verano de 1936, pero nada de aquello tuvo la entidad de lo que se vivió a principios de 1939, durante la triunfal ofensiva franquista sobre Cataluña, que conllevó el paso de la frontera hispano-francesa de un mínimo de 470.000 personas en apenas seis semanas. A estas se les unirían otras 15.000 que consiguieron salir desde los puertos de la zona levantina antes del colapso militar de marzo de 1939 y que lograron llegar, bien a Francia, bien a la Argelia francesa. Esta oleada final del exilio revisió un carácter muy diferente a las migraciones políticas previas por varias razones que lo convierten en "un éxodo sin precedentes" (palabras de Geneviève Dreyfus-Armand).

Ante todo, porque no se trataba ya de la llegada espasmódica y discontinua de unos centenares de militantes y dirigentes de partidos y sindicatos republicanos, con o sin sus familias. Al contrario, el fenómeno consistió en la entrada masiva, rápida y convulsa de millares de civiles y militares en retirada angustiada y penosa. Por eso, a diferencia de los episodios previos, esta marea humana vencida y abatida tuvo que ser gestionada y alojada por las autoridades francesas de manera improvisada y no poco drástica: en campos de internamiento creados al efecto mayormente en el departamento de los Pirineos orien-

tales, entonces un área básicamente agrícola y pesquera que contaba con 250.000 habitantes abrumados por una avalancha humana que casi les doblaba en número, hablaba otra lengua y tenía ideas políticas muy diferentes a sus simpatías conservadoras. El recuerdo de aquella recepción temerosa en un invierno gélido por parte de la Francia que se veía como refugio vital quedaría grabado a fuego en la conciencia de la masa exiliada. Vicente Lloréns retrató con perfiles acertados aquel brusco despertar a la cruda realidad del exilio:

Con pocas excepciones, el torrente de republicanos fugitivos fue conducido por fuerzas armadas francesas a campos de concentración localizados principalmente en la costa mediterránea [...]. Campos que al principio no eran otra cosa que extensos arenales cerrados por alambradas y vigilados por guardias móviles y soldados africanos. Tristemente célebres fueron los de Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, que en marzo de 1939 contenía ciento dos mil hombres, y Barcarès, el más reciente y mejor establecido [...]. A estos campos, insuficientes a pesar de su extensión, hay que añadir varios más en otras partes de Francia: Gurs, en los Bajos Pirineos, donde se reunieron miles de vascos, combatientes de las Brigadas Internacionales y de fuerzas de aviación, [...]; Setfonds, en Tarn-et-Garonne, con buen número de técnicos y obreros calificados; Bram, en Aude, con intelectuales, funcionarios y no pocos panaderos que trabajaban para la Intendencia militar francesa para

proveer de pan a todos los demás campos; Le Ver-net, Haute-Garonne, que tuvo carácter disciplinario, y Agde, en Hérault, donde hubo numerosos catalanes.

Es incuestionable que al término de la Guerra Civil la cifra de expatriados había superado ampliamente el medio millón de personas y hay estimaciones que la sitúan en 600.000 refugiados en conjunto, contando aportes posteriores (por ejemplo, entre 1946 y 1948 huyeron de España otros 21.000 represaliados). Sin embargo, también es cierto que su entidad numérica fue disminuyendo rápidamente. Por un lado, el gobierno francés no estaba dispuesto a sostener de manera indefinida una población exiliada de esa magnitud (pese a que su manutención corrió inicialmente a cargo del gobierno republicano en el exilio). Y presionaba para que regresaran a su país de origen o se fueran a otro destino final (mayormente a la América de habla hispana). Por otro lado, buena parte de los refugiados acabó pensando que era mejor afrontar el riesgo de regresar a la España de Franco, vistas sus equívocas promesas de trato benévolo y comprobadas las penalidades de la vida en los campos (sobre todo una vez iniciada la guerra mundial en septiembre de 1939).

A finales de 1939, en torno a 300.000 refugiados habían retornado a su patria para sufrir las penalidades del vencido con mayor o peor fortuna. El resto de los exiliados, un máximo de 300.000 personas en su conjunto (su volumen exacto es imposible de establecer), permanecería fuera de España durante muchos años (al menos mientras el franquismo mantuvo la persecución por de-

litos derivados de la Guerra Civil, vigente hasta 1966) o incluso para el resto de sus vidas.

El mayor contingente, cifrado en unas 200.000 almas, se afincaría en Francia, mayormente en los departamentos del sur (con Toulouse como "capital" oficiosa del exilio). Otro máximo de 60.000 fugitivos acabarían "transiterados" (feliz expresión del filósofo José Gaos) en el conjunto del continente americano. México sería destino principal de más de la mitad de todos ellos (no menos de 30.000 en un país que entonces tenía 19 millones de habitantes), gracias a la generosidad del gobierno de Cárdenas. Detrás estuvo Argentina (receptora de hasta 10.000 refugiados, en un país de menos de quince millones), la República Dominicana (máximo de 5.000 en un país de menos de dos millones), Venezuela (hasta 5.000 para menos de cuatro millones) y Chile (entre 2.500 y 3.500 en un país de menos de cinco millones). Los restantes exiliados acabarían desperdigados por decenas de países europeos (4.500 en la Unión Soviética, cifra muy parecida a la de acogidos por Gran Bretaña), americanos (un millar entre Estados Unidos y el Canadá, otro millar en Colombia y medio millar en Brasil) y hasta africanos, asiáticos y oceánicos.

El masivo exilio que puso término a la Guerra Civil no era el primero aunque fuera a la postre "el más trágico de la historia de España" (juicio de Alicia Alted). Tampoco era un caso anómalo en la Europa de la primera mitad del siglo XX, bautizado por los analistas como "el siglo de los refugiados" (griegos y turcos, armenios, rusos blancos, judíos...). Sin embargo, pese a esa tradición de exilios hispánica y europea, el exilio español de 1939

constituía un caso singular en varios aspectos cruciales. En el orden internacional, era resultado de una sangrienta guerra civil que había tenido una decisiva dimensión exterior y había suscitado enorme interés entre la opinión pública (mayormente simpatizante de la causa republicana, aunque con sectores influyentes favorables al bando franquista). Así se explica que aquel contingente de exiliados acabara encontrando refugio en sitios tan distintos y alejados de su patria de origen.

Desde el punto de vista español, era un exilio de masas superior en cantidad a cuanto se había registrado en la historia nacional y tenía características peculiares de entidad cualitativa. De hecho, partieron al exilio españoles de todas las regiones sin excepción, aunque más desde Cataluña y Aragón, por razón de cercanía territorial a la frontera francesa, que desde Asturias o Extremadura, por el motivo inverso. En el caso de los que encontraron refugio en Francia en 1939, nada menos que el 36,5% eran catalanes, seguidos de aragoneses (18%), levantinos (14,1%), andaluces (10,5%), madrileños y castellano-manchegos (7,6%) y nortños en general (5,2%: más asturianos que vascos y cántabros). En el caso de los que se afincaron en México, también la contribución catalana era mayoritaria (aunque menor: 21,8%), seguidos de nortños (17,2%: asturianos, vascos y cántabros), madrileños y castellano-manchegos (16,1%), levantinos (10,7%) y aragoneses (6,1%).

Ese torrente humano exiliado era de todas las edades (aunque predominaban los jóvenes del entorno de veinte años) y de ambos géneros (con predominio de varones). Entre los llegados a Francia a principios de 1939 había

un mínimo de 220.000 hombres que habían sido soldados movlizados frente a otro mínimo de 210.000 civiles entre los que se contaban mujeres (70.000), niños (otros 70.000) y ancianos (unos 50.000), amén de más de 10.000 mutilados y enfermos de diversa gravedad.

También eran de todas las condiciones sociales: casi la mitad (45,5%) eran obreros manuales y técnicos del sector secundario industrial; poco más del 30% eran trabajadores agrícolas y algo menos del 20% se había ganado la vida en el moderno sector terciario. Y en cuanto a sus opiniones y credos políticos, abrigaban todo el espectro desde el republicanismo democrático hasta el anarquismo, pasando por el socialismo, el comunismo y los nacionalismos vasco y catalán.

La existencia y vivencias de esa enorme masa exiliada no fueron en modo alguno fáciles. Lanzados al abismo del destierro como vencidos sin posibilidad de retorno (salvo arrojando graves riesgos para sus vidas), tuvieron la desgracia de sufrir en sus respectivos países de acogida las consecuencias del estallido de la Segunda Guerra Mundial, singularmente aquellos que quedaron en Europa (la mayoría) y no tuvieron la fortuna de recalcar en países americanos (menos desarrollados pero más alejados del frente bélico). Durante ese periodo de 1939-1945, considerando todavía su expatriación como provisional, el sentimiento de las masas de exiliados osciló entre el desánimo impotente (por su falta de fuerza para derribar el régimen franquista) y la ilusión de la esperanza (en una victoria aliada que arrastrara consigo al franquismo). De hecho, vivieron durante ese sexenio bélico y la inmediata posguerra bajo la creencia ilusoria

de que "la guerra no había terminado" y que la derrota de las potencias del eje llevaría pareja la caída de Franco. Pero no tardarían mucho en darse cuenta de su error de juicio, que les haría sentirse doblemente derrotados.

Sin embargo, el factor persistente de la vida política de los exiliados siguió siendo la división interna y la lucha fratricida. El final de la guerra y la derrota habían acen tuado las previas fracturas que habían lastrado el esfuerzo bélico republicano. Y esas mismas fracturas entre los distintos partidos y sindicatos, convertidas en el exilio en diferencias insalvables, limitaron la eficacia de su activismo político.

La principal división que hizo imposible un frente unitario opositor ante el franquismo enfrentaba a los seguidores y detractores del doctor Negrín, último jefe del gobierno refrendado por las Cortes. La discordia entre ambos grupos impidió la necesaria colaboración entre ambas instituciones y dio origen a una suicida lucha política para lograr el apoyo entre los exiliados desperdigados por Europa y América Latina. No en vano, frente al organismo de ayuda al exilio constituido por Negrín, el SERE (Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles), sus opositores liderados por Prieto constituyeron otro organismo alternativo, la JARE (Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles).

La constitución de ambos organismos ya en 1939 fue el momento culminante de la división política de lo que quedaba del aparato institucional de la República derrotada militarmente. Desde entonces, el cisma en el exilio quedó consumado y daría origen a una batalla que desangraría las fuerzas de ambos contendientes y lastimaría su capacidad de acción política y diplomática.

Y todavía estaba por llegar lo peor: el final de la contienda mundial con la derrota del eje no significó la caída de Franco ni el retorno de la República a España. Desde el verano de 1945, las dos grandes potencias occidentales vencedoras (Gran Bretaña y Estados Unidos) habían puesto en marcha una política de cuarentena contra el régimen español. Su propósito era forzar la retirada voluntaria de Franco en favor del pretendiente, don Juan de Borbón, con el apoyo del alto mando militar, de los grupos monárquicos y de la izquierda moderada, y sin arriesgarse a una reapertura de la Guerra Civil. El interés geoestratégico de la península ibérica para la defensa de Europa occidental, acentuado por las primeras muestras de disensión entre la URSS y sus antiguos aliados, reforzaba esa voluntad de “no intervención” en asuntos internos de terceros países y de evitar todo peligro de desestabilización política en España. Desestimando, por tanto, la demanda soviética de aplicar sanciones efectivas (económicas o militares), las potencias democráticas se limitaban a imponer un ostracismo internacional desdentado y más aparente que eficaz. Por eso, dentro de sus ambiguos contornos, al compás del creciente clima de Guerra Fría entre este y oeste, fue fraguándose la supervivencia de la dictadura franquista en la posguerra mundial.

Mientras el exilio republicano se aprestaba a vivir después de 1945 sin la esperanza del retorno, la España regida con mano de hierro por Franco iba recuperando sus fuerzas con lentitud pero sin temor a intervenciones exteriores. El país tardaría mucho tiempo en superar las consecuencias de aquella hemorragia humana de 1939,

que privó al país de la competencia de un altísimo número de brazos y cerebros.

El único consuelo posible que cabe encontrar en aquella tragedia humanitaria es tan paradójico como trascendente: los exiliados expulsados de España por vencedores que los consideraban la “anti-España” acabarían reforzando la presencia de la cultura española en los países de acogida y transfiriendo sus saberes a otros pueblos cercanos o lejanos, pero ya para siempre unidos a España por ese flujo migratorio. Y, quizá, el paradigmático caso mexicano sea el más ilustrativo de los efectos históricos a largo plazo que tuvo el exilio de 1939 en las relaciones hispano-americanas y en la renovación de las percepciones mutuas, lastradas hasta entonces por los estereotipos de las guerras de emancipación del siglo XIX y tiempos posteriores (el español que era visto como conquistador cruel y vanidoso o como emigrante pobre y menesteroso). Estudiando la vida y obra de un notable grupo de exiliados afincados en México, una historiadora hispanomexicana (pero no exiliada), Ascensión Hernández de León-Portilla, subrayaba en 1978 ese papel de “puente” cultural entre ambas orillas del Atlántico que había cumplido el exilio y que era su mejor legado. No cabe mejor homenaje final a sus involuntarios protagonistas que reproducir las palabras de esa autora:

En México quizá se pueda ver con mayor claridad que su presencia, además de haber impreso una huella en la vida cultural del país, es considerada como un estímulo en otros ámbitos de la vida mexicana —economía sobre todo— y que contribu-

yó a que fructificasen instituciones y personas que hoy son protagonistas del presente. Tan importante como la huella dejada en el campo de la cultura, los transterrados dejaron otra huella quizá todavía menos visible pero a la larga importantísima para el acercamiento hispano-mexicano. Gracias a su presencia en México, y sospecho que lo mismo se puede decir de otros países de América, se conoció a un nuevo tipo de español. [...] En América, concretamente en México, se descubrió a otros españoles que naturalmente proyectaban una nueva imagen de España. Con los años, la actitud de ellos, su asimilación y entrega al país, confirmó la confianza que el Gobierno y la sociedad mexicana había depositado en ellos cuando los acogieron. El nuevo tipo de español –con excepciones desde luego– desvalorizaba el tópico de aquel otro español que –voluntaria o involuntariamente– había herido el nacionalismo mexicano. Este hecho propició que en las conciencias de muchas gentes se formara una imagen dual del español: por un lado, persiste la del español tradicional –el gachupín– cada vez más escaso por la disminución de la emigración española a América; al lado de ésta, el español refugiado o transterrado, que hizo posible el conocimiento de otra cara de España en México, que abriría nuevas perspectivas entre ambos países. [...] Quizá sea ésta una de las aportaciones claves del Exilio.

BIBLIOGRAFÍA: UNA SELECCIÓN BÁSICA

La selección de obras que sigue es solo una mínima parte de la inmensa producción bibliográfica existente sobre la Guerra Civil. Recoge una pequeña muestra de los trabajos más interesantes surgidos en los últimos decenios de investigación historiográfica, a juicio del siempre leal pero falible saber y entender del seleccionador. Por supuesto, no están todos los que son, si bien son todos los que están. Excluye la reiteración de obras canónicas comentadas en el primer capítulo. Pero incluye a los autores que han sido registrados en el texto de manera expresa en algún momento por su relevancia o renovadora perspectiva. Para mayor facilidad de uso, la selección está organizada en cinco apartados temáticos.

1. OBRAS GENERALES

- Álvarez Tardío, Manuel y Del Rey Reguillo, Fernando (eds.), *El laborinto republicano. La democracia española y sus enemigos*, Barcelona, RBA, 2012.
- Bullón de Mendoza, Alfonso (dir.), *República y guerra civil. Setenta años después*, Madrid, Actas, 2008.
- Casanova, Julián. *República y guerra civil*, Barcelona/Madrid, Crítica – Marcial Pons, 2007.
- Cruz, Rafael, *En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936*, Madrid, Siglo XXI, 2006.
- Fraser, Ronald, *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la guerra civil española*, Barcelona, Crítica, 2001.

